LOS NUEVOS CUERPOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ⁽¹⁾

Mar Jimeno Bulnes
Profesora Titular de Derecho Procesal.
Universidad de Burgos
Magistrada Suplente de la Audiencia Provincial de Burgos

La LO 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial acomete una reforma en profundidad del llamado personal «auxiliar» de la administración de Justicia procediendo a la creación de nuevos cuerpos de funcionarios, en un intento de profesionalizar y dignificar la valiosa labor que dicho personal realiza. En esta línea se contempla una nueva atribución de funciones de mayor envergadura procesal —muchas hasta ahora en la práctica ya de ordinario asumidas— así como un completo y detallado estatuto jurídico con introducción de mejoras en determinados aspectos, entre ellos y de modo importante, el económico. Sin embargo, la reforma procesal en esta materia no será completa hasta que en efecto tenga lugar un eficiente reparto de medios personales y materiales —en especial, equipamiento informático e infraestructuras físicas— así como una mejor organización del «equipo» judicial, tanto a nivel externo en relación, por ejemplo, con el acceso de profesio-

1. El presente trabajo es resultado de la ponencia presentada en las Jornadas sobre la administración de Justicia organizadas por la Gerencia regional de Justicia de Castilla y León en Burgos los días 28 y 29 de noviembre de 2005. Asimismo se agradece y reconoce la colaboración mostrada por D.ª M.ª del Mar Gómez Cintas, Secretaria Judicial y Asesora jurídica de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y Política Interior de la Comunidad de Madrid, D. Luis M.ª Ortega Arribas, Secretario Judicial de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Burgos y, especialmente, por D. Fabián del Río Moro, Gestor Procesal y Administrativo del Juzgado de Instrucción núm. 1 de la ciudad de Valladolid.

Mar Jimeno Bulnes

nales jurídicos y público en general, como interno y así, fundamentalmente, por lo que atañe a una mayor colaboración entre funcionarios y con superiores jerárquicos (Juez o Magistrados y Secretario Judicial).

SUMARIO

- I. INTRODUCCIÓN.
- II. SITUACIÓN ANTERIOR A LA LO 19/2003: EL PASADO.
- III. LA ACTUAL REGULACIÓN CONTENIDA EN LA LOPJ: EL PRESENTE.
 - 1. Clasificación de Cuerpos.
 - 1.1. Cuerpos Generales.
 - 1.1.1. Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
 - 1.1.2. Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
 - 1.1.3. Cuerpo de Auxilio Judicial.
 - 1.2. Cuerpos Especiales.
 - 2. Régimen general relativo al estatuto jurídico.
- IV. PROBLEMÁTICA Y PROYECTOS DE FUTURO.
- V. BREVE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.

Listado de abreviaturas utilizadas:

Cfr.	confróntese	LO	Ley Orgánica
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial	LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
dir./dirs.	director/directores	STC/SSTC	Sentencia/sentencias del Tribunal Constitucional
Ed./ed.	Editorial/edición	t.	tomo
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil		

I. INTRODUCCIÓN

La LO 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acomete una reforma en profundidad del llamado personal «auxiliar»⁽²⁾ (para otros, personal «colaborador»⁽³⁾, quizás más acorde con la nueva situación) de la administración de Justicia hasta el punto de introducir la creación de nuevos cuerpos de funcionarios en sustitución de los hasta ahora vigentes. Tal reforma no obedece puramente a un cambio de denominación sino, de una forma más amplia, a un cambio de concepto y, en alguna medida, del reparto de funciones en consonancia con el nuevo diseño de oficina judicial en la misma ley propuesto.

Lamentablemente, y a pesar de constituir dichos funcionarios una pieza clave en el engranaje judicial, no han sido mucho los estudios que hasta ahora se han ocupado de tal importante figura omnipresente en los órganos jurisdiccionales, más allá de alguna bibliografía específica⁽⁴⁾, así como aquella ocupada en el examen genérico de la Secretaría judicial, hoy oficina judicial⁽⁵⁾.

2. En esta línea, MONTERO AROCA, J.: *Derecho Jurisdiccional*, t. I, *Parte General*, con GÓMEZ COLOMER, J.L., MONTÓN REDONDO, A. y BARONA VILAR, S., 14.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 184 y ss. Tal era la rúbrica ya empleada por HERCE QUEMADA, V.: «La nueva Justicia Municipal», *Revista de Derecho Procesal*, núm. 1, 1946, pp. 47 y ss, esp. p. 53.

3. GIMENO SENDRA, V. *Introducción al Derecho Procesal*, 2.ª ed., Colex, Madrid, 2004, pp. 203 y ss.

4. Entre los estudios clásicos, PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ, L.: «Agentes judiciales y eficacia del Derecho», *Trabajos y orientaciones de Derecho Procesal*, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1964, pp. 96 y ss. Así también, *in genere*, PAREJA RUIZ, A.: «Reflexiones sobre el personal auxiliar de la administración de Justicia», *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, núm. 815, 1969, pp. 3 y ss.; posteriormente, al hilo de la promulgación de la vigente LOPJ, HERRERA CASCÓN, H.: «La función de los oficiales de la administración de Justicia en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial», *Revista Procuradores*, núm. 15, 1985, pp. 15 y ss.

5. Entre muchos y a modo de ejemplo, DE HOYOS SANCHO, M.: «Nuevo diseño de la secretaría judicial y agilitación de la justicia», *Poder Judicial*, núm. 50, 1998, pp. 13 y ss., esp. p. 34. Así también resulta de interés por el diverso origen de sus autores (político, universitario y especialmente sindical) la obra rubricada *Jornadas de estudio «la oficina judicial: hacia un nuevo modelo»*, Colex, Madrid, 2000 y en fecha más reciente, entre otros, CARRETERO GONZÁLEZ, C.: «Estructura y funcionamiento de la oficina judicial», *Revista de Derecho Procesal*, 2004, núm 1-3, pp. 153 y ss., esp. pp. 167 y ss.; MARTÍN CONTRERAS, L.: «Un nuevo diseño para la ofici-

Mar Jimeno Bulnes

No obstante y entre estos últimos, caso de abordar el tema ahora objeto de estudio ya pusieron de relieve en su día la deficiente situación de tal personal auxiliar al servicio de la Administración de Justicia ante la indefinición de sus atribuciones que entonces tenía lugar ⁽⁶⁾.

De esta forma se da paso de una vieja secretaría judicial decimonónica a una moderna oficina judicial correspondiente al siglo XXI, tal y como es anunciado en la «Propuesta sobre nuevo diseño de oficina judicial» elaborada por el Ministerio de Justicia en fecha 8 de noviembre de 2004 ⁽⁷⁾. A este nuevo modelo han de adaptarse todos los operadores jurídicos dentro —jueces y magistrados, secretarios judiciales, fiscales, personal al servicio de la administración de Justicia...— y fuera del palacio de Justicia —esencialmente, abogados y procuradores— además de los usuarios y/o «clientes» ⁽⁸⁾ de la administración de Justicia; es por tanto necesario por parte de todos ellos un cambio asimismo de actitud.

na judicial», *Diario La Ley* de 3 de noviembre de 2004, núm. 6119; MARTÍN MORATO, M.: «El nuevo modelo de oficina judicial», *Revista Jurídica de Castilla y León*, núm. 5, 2005, pp. 173 y ss., esp. pp. 183 y ss.; VIEIRA MORANTE, F.J.: «La nueva oficina judicial: luces y sombras», *Jueces para la democracia*, núm. 52, 2005, pp. 16 y ss. Una excepción en este sentido lo constituye, por ejemplo y a buen seguro entre algún otro, el trabajo de RODRÍGUEZ RIVERA, F.C.: «Funciones de los Secretarios Judiciales y del resto de cuerpos de funcionarios al servicio de la administración de Justicia tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003, que modifica a la Ley Orgánica del Poder Judicial», *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, núm. 1963, de 15 de abril de 2004, pp. 1417 y ss.

6. De modo fundamental, PEDRAZ PENALVA, quien ha ocupado buena parte de su obra bibliográfica al examen de la Secretaría Judicial poniendo de relieve sus deficiencias y problemática, así como proponiendo ya a la fecha la actual denominación de oficina judicial. Véase PEDRAZ PENALVA, E.: «Notas sobre el Secretariado en el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de 23 de febrero de 1985», *La Ley* 1985-I, pp. 1030 y ss., esp. pp. 1034 y ss.; «La nueva Secretaría Judicial», *Poder Judicial*, núm. 26, 1992, pp. 89 y ss.; y, especialmente, «Notas sobre la oficina judicial y su reforma», *Justicia*, 1989-IV, pp. 847 y ss., esp. pp. 849 y ss.

7. Accesible a través de la página web <<http://www.funcionariosjusticia.com/proyectos>>. Así también, en comentario a la citada propuesta, véase el documento de conclusiones del seminario sobre la nueva oficina judicial organizado por el Consejo General del Poder Judicial en las fechas 2 a 4 de marzo de 2005, así como las «Alegaciones al proyecto de diseño de la nueva oficina judicial en el ámbito competencial del Ministerio de Justicia» presentadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (sector nacional de Justicia), CSI-CSIF, accesible en la anterior página web al menos a la fecha de noviembre de 2005.

8. En propuesta del término de cliente de la oficina judicial por analogía con la empresa privada véase GÓMEZ ÁLVAREZ, R.: *Calidad en la gestión de la oficina judicial*, Bosch, Barcelona, 2004, p. 39. Así también, para una visión general de la aplicación de tales sistemas de gestión en el ámbito judicial, BALERDI MÚGICA, J.M., BENDALA GARCÍA, R. y CARMENA CASTRILLO, M.: *Claves para la gestión de la nueva oficina judicial*, El Derecho, Madrid, 2005.

Incluso recientemente en esta misma revista a tenor de la proyectada «justicia de proximidad» en clara crítica a la falta de profesionalidad de sus titulares; así, PEDRAZ PENALVA, E.: «Los jueces de proximidad (sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en materia de organización territorial de la administración de Justicia)», *Revista Jurídica de Castilla y León*, núm. 8, 2006, pp. 13 y ss., esp. pp. 52 y ss.

Por nuestra parte afrontamos aquí y ahora el reto de abordar siquiera brevemente el papel y en su caso la problemática de tales cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia conforme son contemplados en los actuales artículos 470 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así y en primer lugar, contemplando la situación anterior de dicho personal previa a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada por la LO 19/2003 para, en segundo lugar y de modo fundamental, centrarnos en la creación de tales nuevos cuerpos de funcionarios a partir de ésta. Por último y en tercer lugar se intentará vislumbrar ya someramente la problemática y proyectos de futuro en relación con el tema que nos ocupa.

II. SITUACIÓN ANTERIOR A LA LO 19/2003: EL PASADO

Un pasado remoto hace recordar la antigua clasificación de «agentes subalternos en auxilio de la acción de la autoridad judicial» en referencia a todos aquellos participantes diferentes a Jueces y Magistrados y por oposición a los denominados «auxiliares no subalternos», hoy en su gran parte aglutinados bajo el concepto de cooperadores de la Justicia⁽⁹⁾. Tal denominación como «subalternos» procede de la anterior legislación procesal y bibliografía española; así consta, por ejemplo, en la inicial Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855⁽¹⁰⁾ al igual que en los tratados clásicos, entre otros, de BECEÑA⁽¹¹⁾, ORTIZ DE ZÚÑIGA, RIVES y ORTIZ ARCE⁽¹²⁾, y GÓMEZ DE LA SERNA. Precisamente en la obra de este último, dentro de la figura de «agente subalterno» se aglutinan categorías tan dispares como «*los escribanos, los relatores, los cancilleres-registradores, los tasadores y otros dependientes de inferior escala*»⁽¹³⁾, entre los cuales se cita, además de otros profesionales⁽¹⁴⁾, a los alguaciles y porteros.

9. Así, y siguiendo a ORTIZ DE ZÚÑIGA, ministerio fiscal, abogados y procuradores, asesores o letrados, facultativos forenses, intérpretes de lenguas, revisores de letras y firmas, ...; ORTIZ DE ZÚÑIGA, M.: *Práctica general forense*, t. I, 6.ª ed., Madrid, 1870, pp. 95 y ss.

10. Arts. 107 y ss., relativos a la recusación de tales «subalternos de Juzgados y Tribunales».

11. *Magistratura y Justicia*, Madrid, 1928, esp. p. 165.

12. RIVES, F. de P. y ORTIZ ARCE, D.: *Organización de tribunales y leyes de procedimiento*, 4.ª ed., Reus, Madrid, 1932, pp. 67 y ss.

13. GÓMEZ DE LA SERNA, P. y MONTALBÁN, J.M.: *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, t. I, 2.ª ed., Madrid, 1855, p. 178; la cursiva es nuestra.

14. Por ejemplo, los *alcaldes* de las cárceles «*que responden con su persona y bienes de la custodia de los presos y de que se cumplan las órdenes de incomunicación*»; los *pregoneros* o voz pública, «*que dan los pre-*

Mar Jimeno Bulnes

De este modo las funciones entonces desempeñadas por tales alguaciles y porteros son, con las lógicas salvedades que la distancia temporal impone, hoy compartidas por el actual personal al servicio de la administración de Justicia. De forma concreta, y en lectura de GÓMEZ DE LA SERNA sobre los alguaciles, se trataba de «unos dependientes de los tribunales, encargados de la ejecución de las órdenes que estos les comunican: hacen las prisiones que los jueces decretan ..., ejecutan las citaciones, embargos y diligencias que les encargan, y por último, son auxiliares de la autoridad judicial en cuanto esta les previene»⁽¹⁵⁾. Por su parte, los porteros «tienen el encargo de velar y hacer guardar el decoro y compostura que debe observar el público y de ejecutar las disposiciones de apremios y otras diligencias judiciales».

Con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870 se realiza una importante clasificación entre dos cuerpos dentro del concepto genérico de personal auxiliar; por una parte el de los llamados en sentido estricto «auxiliares de los Juzgados y tribunales»⁽¹⁶⁾, constituido por Secretarios, Archiveros judiciales y Oficiales de Sala (u Oficiales de Escribanía en los Juzgados) y, por otra, de nuevo, el de los «subalternos» de Juzgados y tribunales, que comprende «porteros, alguaciles, mozos de estrados y mozos de oficio»⁽¹⁷⁾. Ciertamente no puede establecerse una identificación exacta de tales figuras con la actual clasificación de los nuevos cuerpos, por cuanto a los oficiales se les exige conocimientos jurídico-procesales previos⁽¹⁸⁾ y sus funciones resultan ser hoy compartidas por secretarios judiciales y otros funcionarios judiciales⁽¹⁹⁾. Por el

gones y anuncian las subastas y remates» y el ejecutor de la justicia o verdugo, «que tiene el triste oficio de llevar a efecto las condenaciones capitales» (GÓMEZ DE LA SERNA y MONTALBÁN: *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, ob. cit., pp. 187 y 188).

15. Conforme a la Real Orden de 29 de noviembre de 1837 y al art. 78 del Reglamento de los Juzgados de Primera Instancia de 1 de mayo de 1844, para ser alguacil se requería «ser español, de edad de veinticinco años al menos, de buena conducta, tener aptitud para el desempeño de su cargo y saber leer y escribir».

16. Título IX, arts. 472 y ss.

17. Art. 565.

18. Textualmente, «tener conocimientos de las prácticas judiciales, relativas al oficio que han de desempeñar» (art. 544.2.º). El art. 26 de la Ley Adicional a la misma de 14 de octubre de 1882 añade en defecto de la acreditación de tales conocimientos jurídico-procesales la exigencia de ser «Letrado, o haber hecho y aprobado los estudios que se requieren para el ejercicio de la fé pública». Asimismo les diferencia entre primeros y segundos con una dotación económica de 2.000 y 1.500 pts. anuales respectivamente (art. 25).

19. De forma concreta el art. 543 les encomienda «hacer los emplazamientos, citaciones y notificaciones, embargos, recogidas de autos y demás diligencias que deban practicarse fuera de la presencia judicial, de orden de los Juzgados ó tribunales de que dependan; asistir al Presidente del Tribunal y Presidentes de las Salas y á los Jueces á cuyas órdenes estuvieren para cumplir las que les dicten relativas al servicio judicial; asistir á los estrados (...) haciendo que los concurrentes guarden en ella orden y compostura».

contrario para ser subalterno basta «*ser español, mayor de 25 años, saber leer y escribir, ser de buena conducta y no haber sufrido penas correccionales ni afflictivas*»⁽²⁰⁾ realizando la ley una distinción entre las funciones encomendadas a porteros y alguaciles⁽²¹⁾ y aquellas de menor categoría atribuidas a mozos de estrados y de oficios, quienes a su vez podrán ser también habilitados para desempeñar el cargo de los primeros⁽²²⁾. Finalmente, una Ley Adicional se ocupaba en establecer el número de tales Oficiales de Sala y personal subalterno para cada una de las Audiencias (Territoriales y de lo Criminal) a la fecha existentes⁽²³⁾.

Ya a la fecha la literatura procesal pone de relieve tanto la importancia de las tareas desempeñadas —pese a su carácter *inferior*— por todo este personal auxiliar y subalterno⁽²⁴⁾ como la inadecuada rúbrica y clasificación de personal entonces realizada. Entre dicho personal auxiliar se sitúa al mismo nivel Secretarios Judiciales y Oficiales además de la categoría de Auxiliar en sentido estricto y funcionarios administrativos de los tribunales introducidos por la Ley de 8 de junio de 1947⁽²⁵⁾. En cuanto al denominado personal subal-

20. Art. 570.I LOPJ 1870.

21. En suma y conforme al art. 574, «*cumplirán las obligaciones que les impongan las leyes y reglamentos; obedecerán las órdenes que reciban de los Jueces y Presidentes de los Tribunales y Salas á que correspondan; guardarán Sala; auxiliarán á los Secretarios de gobierno y de justicia y á los Oficiales de Sala en la práctica de las diligencias judiciales y en los encargos que para cumplir los acuerdos de los tribunales les correspondan, y no podrán excusarse de obedecerlos, sin perjuicio de acudir en queja á los superiores jerárquicos respectivos por los agravios que reciban*». La negrita es nuestra. Por otra parte el art. 27.II de la anterior Ley Adicional cifra su salario anual a la fecha de 1870 en 1.000 pts.

22. Art. 575, según el cual y a falta de tal habilitación, «*se ocuparán en los trabajos mecánicos que señalen los reglamentos interiores de los Juzgados y Tribunales, y cumplirán las órdenes de sus superiores*». Conforme al mencionado art. 27.II de la Ley Adicional recibían una dotación de 750 pts. anuales.

23. Art. 1 Ley Adicional, si bien el art. 24 indica de forma general que «*habrá el número de Oficiales de Sala que requieran las necesidades del servicio*» mientras que el posterior art. 27 establece para cada Audiencia «*un portero, el número de alguaciles necesario y un mozo de estrados*».

24. Por todos, ORTIZ DE ZÚÑIGA: *Práctica general forense*, ob. cit., p. 71, quien específicamente refiere que «*ni juzgados y tribunales ni jueces y magistrados pueden ejercer por sí solos las diversas obligaciones de su cargo, sin el concurso y cooperación de otras muchas personas que desempeñan también atribuciones y deberes, si no elevados, muy influyentes en los grandes objetos de la justicia*». También la rúbrica nos pertenece.

25. Hasta la promulgación de esta ley además el Secretario Judicial podía contratar a «*auxiliares o escribientes que le ayudaran en sus trabajos*» conforme al art. 534 LOPJ 1870, para lo cual le era reservada «*la cantidad alzada que se considerara necesaria*». Ello deriva en la posterior indefinición de las tareas de dicho personal auxiliar al servicio de la administración de Justicia; así, PEDRAZ PENALVA: «*Notas sobre la oficina judicial y su reforma*», ob. cit., p. 849.

No es hasta la Ley de 18 de marzo de 1966, de Reforma Orgánica y Adaptación de los Cuerpos de la Administración de Justicia a la Ley de Funcionarios Civiles del Estado cuando opera la actual clasificación tripartita

Mar Jimeno Bulnes

terno se equipara al alguacil y/o agente judicial a partir del Decreto de 25 de septiembre de 1943 con los empleados de servicios puramente materiales (mozos), amén del propio carácter peyorativo de los términos legales empleados⁽²⁶⁾; máxime cuando la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 hasta no hace mucho vigente otorgaba a tales agentes judiciales funciones de decisiva importancia en el terreno de la ejecución⁽²⁷⁾.

En cambio, no se contempla aún la inclusión legal de otros cuerpos como es el caso concreto de los médicos forenses, quienes a la fecha ejercen sus funciones, junto con otros profesionales (por ejemplo y entre otros, intérpretes de lenguas), sin carácter de permanencia y sí de independencia respecto de Juzgados y Tribunales⁽²⁸⁾. Sin embargo y ya desde la literatura procesal se venía reclamando la necesidad de la dotación de tales facultativos forenses entre la plantilla auxiliar de Juzgados y Tribunales y así la formación de un cuerpo específico⁽²⁹⁾. Habrá de esperarse a la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 (en adelante LOPJ) para contemplar la creación del cuerpo de médicos forenses dentro de la administración de Justicia⁽³⁰⁾.

En efecto, el Libro VI de la LOPJ procede a la introducción de los entonces nuevos cuerpos de funcionarios «*al servicio de la administración de Justicia*» tales como, por una parte, Oficiales, Auxiliares y Agentes judiciales y, por otra, Médicos Forenses, además de prever con carácter general la creación de otros cuerpos «*para el auxilio y colaboración con los Jueces y Tribunales*»⁽³¹⁾. Dichos cuerpos adquieren así el carácter de cuerpos nacionales dada la supresión del anterior sistema de arancel para proceder a su retribución compartiendo com-

al amplificar y suprimir la anterior referencia al órgano jurisdiccional; en esta línea, PAREJA RUIZ, A.: «Reflexiones sobre el personal auxiliar...», ob. cit., pp. 5 y 6.

26. En esta línea PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ: «Agentes judiciales y eficacia del Derecho», ob. cit., esp. p. 7.

27. Especialmente en relación con el embargo de bienes, y así su consideración legal como «*ejecutores del embargo*» (por ejemplo, art. 1406 LEC 1881), con facultad incluso para realizar la designación de bienes en defecto de designación por parte de deudor y acreedor. Por esta razón PRIETO-CASTRO considera que tales agentes judiciales «*son el Estado en persona, la sombra del juez, el titular del imperium inherente a la potestad ejecutiva, la autoridad y la fuerza*» («Agentes judiciales y eficacia del Derecho», p. 98).

28. Véase RIVES y ORTIZ ARCE: *Organización de tribunales y leyes de procedimiento*, ob. cit., p. 67.

29. Así ORTIZ DE ZÚÑIGA: *Práctica general forense*, ob. cit., p. 109 y, de modo especial, JURADO, S.: «El médico forense en la labor judicial», *Anales de la Clínica médico-forense de Madrid*, 1952, pp. 9 y ss.

30. Coincidimos con FAIRÉN en la opción del término «administración» con minúsculas; así, FAIRÉN GUILLÉN, V.: «Colofón a un comentario de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1.º de julio de 1985», *Revista de Derecho Procesal*, núm. 3, 1985, pp. 623 y ss., p. 628.

31. Anterior redacción del art. 454.1 LOPJ hasta la reforma operada por la LO 19/2003 de 23 de diciembre.

petencias en esta materia Ministerio de Justicia y, «*en su caso*», Comunidades Autónomas, conforme la redacción del anterior artículo 455 —hoy art. 471.1— LOPJ a la luz de la interpretación ofrecida por la STC 105/2000, de 13 de abril⁽³²⁾.

Hecha crítica como ha tenido lugar en tantas ocasiones respecto de la inadecuada regulación del cuerpo de Secretarios Judiciales junto con el restante personal al servicio de la administración de Justicia⁽³³⁾, también resulta confusa la propia expresión «*al servicio*», por cuanto en buena técnica los primeros «servidores» de la administración de Justicia son Jueces y Tribunales en cumplimiento de su mandato constitucional de «*juzgar y ejecutar lo juzgado*» (art. 117.3 CE). Asimismo también fue en su día lamentada la inclusión final del cuerpo de Médicos Forenses por detrás de los restantes cuerpos al igual que su consideración como mero auxiliar pese a su titulación superior y «cooperación» fundamental en el proceso⁽³⁴⁾ —su lugar estaría por ello en el Libro V—, si bien por idéntica literatura felicitada la ampliación operada por la ley orgánica en beneficio de la adscripción de ulteriores profesionales en diversas materias a modo de «*Cuerpos Técnicos o Facultativos de la Administración*»⁽³⁵⁾.

La anterior regulación ofrecida por la legislación orgánica no llevaba a cabo como la actual distinción alguna entre las funciones a realizar por cada uno

32. Sentencia que como es sabido resuelve el recurso de inconstitucionalidad planteado por más de 50 diputados del Congreso respecto de la redacción de tal art. 455 LOPJ ofrecida por la LO 16/1994, de 8 de noviembre, declarando la constitucionalidad del precepto en virtud de la cláusula «en su caso», la cual «*implica que la competencia sobre determinadas materias únicamente podrá considerarse atribuida a las Comunidades Autónomas cuando las materias contempladas sean algunas de aquellas que, con el alcance anteriormente indicado, permiten el juego de las cláusulas subrogatorias existentes en los correspondientes Estatutos o cuando la respectiva competencia se haya asumido por los Entes Autonómicos en virtud de otro título constitucionalmente válido*» (FJ 5.10).

Sobre la participación de las CC.AA. en materia judicial véase MARTÍN CONTRERAS, L.: «Poder Judicial y Autonomías», *Diario La Ley* núm. 6387, de 27 de diciembre de 2005, así como REQUERO IBÁÑEZ, J.L.: «Comunidades Autónomas y Administración de Justicia», *La reforma de los Estatutos de Autonomía*, Revista Jurídica de Castilla y León, Valladolid, 2005, pp. 613 y ss.; más recientemente y en relación con una concreta Comunidad Autónoma, AGUILAR FONTALBA, J.: «Poder Judicial y Administración de Justicia en la propuesta del nuevo Estatuto para Cataluña», *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional*, núm. 18, 2005, pp. 21 y ss.

33. Por todos, JIMENO BULNES, M.: «Las dilaciones indebidas y el Secretario Judicial», *Estudios Jurídicos Cuerpo de Secretarios Judiciales IV-1999, Visión orgánico-procesal del Secretario Judicial*, Madrid, 1999, pp. 267 y ss. y en *Justicia*, núm. 2-3-4, 2000, pp. 289 y ss., esp. pp. 321 y ss.

34. Así, GUILLÉN, V.: «Colofón a un comentario de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1.º de julio de 1985», ob. cit., p. 628, quien refiere gráficamente que «*de haber vivido aún el gran maestro profesor JIMÉNEZ DE ASÚA, hubiera fallecido del disgusto al verlos “colocados” a la cola de la ley*».

35. Conforme a la anterior redacción del art. 469.2 LOPJ.

Mar Jimeno Bulnes

de tales cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes judiciales, siendo ello —como es sabido— objeto de regulación de ulteriores disposiciones reglamentarias, inicialmente bajo el RD 2003/1986, de 19 de septiembre (modificado por RD 489/1994, de 17 de marzo) y posteriormente en virtud del RD 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes al servicio de la administración de Justicia⁽³⁶⁾. A pesar del esfuerzo de tales disposiciones reglamentarias en realizar una enumeración concreta y particular de las funciones a realizar por cada uno de estos cuerpos⁽³⁷⁾ ha de advertirse de la indefinición de éstas, que muchas veces tenía lugar en la práctica diaria de Juzgados y Tribunales hasta el punto de llegarse a producir situaciones «esquizofrénicas» ante la divergencia de las funciones otorgadas en papel y aquellas realizadas en la realidad cotidiana por delegación, sin que además resultaran en correspondencia retribuidas ni se atribuyera su responsabilidad a quien efectivamente las detentaba⁽³⁸⁾. La actuación de estos funcionarios tenía pues lugar a la sombra del proceso, a expensas de la autorización, sustitución o delegación *ad casum* o de forma general al amparo fundamentalmente del art. 282 LOPJ hoy suprimido⁽³⁹⁾, lo cual redundaba notablemente en su propio rendimiento profesional y desánimo personal al encontrar escasos incentivos en la realización de una labor que no siempre les era reconocida⁽⁴⁰⁾, aun cuando la misma sobrepasara en gran medida la que les correspondía (o debiera corresponder) en función del cuerpo.

Todavía además la LOPJ de 1985 hereda el modelo de Secretaría Judicial impuesto en la anterior legislación orgánica de 1870, el cual de forma lógica se hace inservible en el siglo xx. Es urgente una reforma y así la constitución

36. Fruto de la STC 56/1990, de 29 de marzo, en cuyo FJ 11 se hacía ya alusión a una «*futura y necesaria normativa que regulase la colaboración entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Justicia en cuanto a una posible actuación de las cláusulas subrogatorias de los Estatutos de Autonomía en materia de provisión de destinos*» (Preámbulo).

37. Así arts. 3, 9 y 15 RD 249/1996 respectivamente.

38. En esta línea, PEDRAZ PENALVA: «La nueva Secretaría Judicial», ob. cit., p. 89.

39. Disposición adicional 6.^a Ley 19/2003, de 23 de diciembre. Textualmente, recordemos, «*los Secretarios podrán habilitar a uno o más Oficiales para que autoricen las actas que hayan de realizarse a presencia judicial, así como las diligencias de constancia y comunicación*»; habilitaciones que se entendían subsistentes en tanto en cuanto no fueran revocadas y cuya responsabilidad en ellas les era igualmente atribuida. Por lo que respecta al régimen de sustituciones éste operaba para los Oficiales respecto del Secretario en virtud del anterior art. 485 LOPJ y para los Auxiliares respecto de los Oficiales según el anterior art. 486 LEC.

40. Así también CALVO SÁNCHEZ, M.C.: «Algunas sugerencias para el diseño de la nueva Secretaría Judicial», *Justicia* 1992-I, pp. 31 y ss., esp. p. 32.

ya a finales de la década de los ochenta e inicios de los noventa de distintos foros o grupos de trabajo dio lugar a importantes y valiosos documentos ⁽⁴¹⁾, los cuales, a la luz también de las opiniones de operadores jurídicos e investigadores, ponen de relieve los problemas sumariamente anticipados y proponen la elaboración de las líneas que darán lugar a un diseño actual y moderno de oficina judicial como corresponde ya al recién iniciado siglo XXI. Tales líneas de reforma, por lo que a nuestro tema se refiere, se resumen básicamente y entre otras propuestas no aceptadas ⁽⁴²⁾, o todavía pendientes de desarrollo, en una concreta definición del marco de funciones a ejercer por los nuevos cuerpos de funcionarios y la evitación de cualesquiera delegaciones.

III. LA ACTUAL REGULACIÓN CONTENIDA EN LA LOPJ: EL PRESENTE

La Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ⁽⁴³⁾, responde a los objetivos contenidos en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia suscrito por los dos principales grupos políticos de nuestro país (PP y PSOE) el 28 de mayo de 2001, y así se hace indicar en las primeras líneas de la Exposición de Moti-

41. Por ejemplo, entre otros, los procedentes de las distintas Jornadas de la Fe Pública Judicial celebradas desde 1985 en adelante, pudiéndose destacar el resultado de las V Jornadas celebradas en Salamanca los días 8, 9 y 10 de noviembre de 1990 y cuyas ponencias fueron publicadas por el Ministerio de Justicia en el volumen *Documentación Jurídica* 1991, núm. 69. Así también y de modo fundamental el libro resultado de los trabajos realizados por un grupo de trabajo adscrito a la Sección Especial para la Reforma Procesal de la Comisión General de Codificación creada por RD 1343/1988, de 21 de octubre, publicado por el propio Ministerio de Justicia bajo el título *Materiales para una reforma procesal*, Madrid, 1991, con participación de todos los sectores implicados, que lleva a cabo la propuesta de un modelo alternativo de organización judicial a similitud de otras Administraciones Públicas.

Años más tarde también tiene lugar la realización de estudios por parte de sectores sindicales y así, v.gr., LINDE PANIAGUA, E. y ARNALDO ALCUBILLA, E. (Dirs.), *Jornadas de estudio «la Oficina Judicial: hacia un nuevo modelo»*, Colex, Madrid, 2000. Todo ello sin olvidar el importante estudio realizado por el Consejo General del Poder Judicial en su *Libro blanco de la Justicia*, CGPJ, Madrid, 1997, pp. 107 y ss., que de inmediato será objeto de alusión.

42. Por ejemplo, creación de un solo cuerpo de funcionarios con distintas escalas o niveles; véase MARTÍN CONTRERAS, L.: «La reforma de la Oficina Judicial», *Materiales para una Reforma Procesal*, ob. cit., pp. 693 y ss., esp. pp. 715 y ss.

43. BOE de 26 de diciembre de 2003, núm. 309, pp. 46025 y ss., y cuyas disposiciones finales olvidan la referencia a su fecha de entrada en vigor.

Mar Jimeno Bulnes

vos. Por tanto es obligada una breve referencia a éste, cuya redacción, por lo que atañe al ámbito objeto ahora de estudio, establecía un apartado específico bajo la rúbrica «personal al servicio de la Administración de Justicia»⁽⁴⁴⁾ en el que se fijaron como objetivos fundamentales de cara a una futura reforma esencialmente los siguientes: 1) la creación de nuevos cuerpos nacionales de funcionarios con superiores criterios de formación y profesionalización; 2) la asignación de puestos de trabajo de tales funcionarios conforme nuevos criterios; 3) la aprobación de un nuevo estatuto orgánico para el conjunto de tales nuevos cuerpos; 4) la atribución de mayores competencias a las Comunidades Autónomas en materia de gestión de este personal junto al proceso de transferencia de competencias en aquellas Comunidades en que todavía esta no ha tenido lugar. La importancia de tales cometidos se hace tanto más patente cuanto algunos de ellos son reiterados de inmediato en el apartado relativo a la Oficina Judicial⁽⁴⁵⁾.

También la propia Exposición de Motivos de la norma reformadora expone las razones de la nueva regulación y así la ausencia de sintonía entre el marco legal y la realidad cotidiana por lo que respecta a la labor desempeñada por este personal al servicio de la administración de Justicia en la línea que inmediatamente hemos puesto de relieve. Se indica de forma expresa que el nuevo estatuto ahora dispuesto para este funcionariado pretende «*delimitar de manera minuciosa las funciones del personal al servicio de la Administración de Justicia, ofreciendo nuevas soluciones a diferentes desajustes de los que adolece el sistema actual, en el que, en no pocas ocasiones, unos hacen las labores de otros*»⁽⁴⁶⁾. Asimismo pone de relieve otros problemas también denunciados, como es el escaso reconocimiento del esfuerzo personal de tales funcionarios que, como ha sido dicho, pocas veces veían recompensada su labor y no sólo desde el punto de vista económico⁽⁴⁷⁾.

44. Apartado 11.

45. Apartado 12.c), enumerando expresamente como principios en este ámbito: «*se introducirán las Relaciones de Puestos de Trabajo como instrumento técnico adecuado para la identificación de tareas y niveles de responsabilidad (...) En cuanto al personal al servicio de la Administración de Justicia se estudiará la posibilidad de simplificar la actual complejidad de los cuerpos de funcionarios, permitiendo así una carrera administrativa y un nuevo sistema de asignación de puestos de trabajo*».

46. Apartado VIII.2.

47. La discordancia entre el sistema retributivo y las tareas efectivamente realizadas por los anteriores Oficiales, Auxiliares y Agentes judiciales ha constituido alguno de los puntos más criticados; uno de los mayores

De este modo se da nueva redacción al Libro VI de la LOPJ, y así se procede a la creación de nuevos cuerpos de funcionarios con carácter nacional. Se mantiene la rúbrica «*al servicio de la administración de Justicia*» en consonancia con el precepto constitucional (art. 122.1 CE) pero en su lugar opera la sustitución del anterior término «personal» por el de Cuerpos de Funcionarios, en el intento —según preveía el comentado pacto de la Justicia sin duda inspirador de la presente reforma— de profesionalizar al máximo a los nuevos funcionarios. En este caso se excluye ya la referencia al Secretario Judicial, al que se le dedica el Libro V junto con la organización de la oficina judicial aun cuando todavía la ley sigue utilizando la antigua rúbrica en el art. 440 LOPJ ⁽⁴⁸⁾, induciendo así a cierta confusión conceptual.

Si bien una de las propuestas en la materia que nos ocupa fue la creación de un cuerpo único de funcionarios —si acaso con diferentes niveles y especializaciones— que tuvo apoyo mayoritario por parte de las organizaciones sindicales ⁽⁴⁹⁾,

problemas tenía lugar en relación con el régimen de sustituciones entre Oficiales y Auxiliares, que no eran retribuidas si tenían lugar en la misma población aun en distintos órganos jurisdiccionales. El sistema retributivo es además de por sí complejo, advirtiéndose numerosas retribuciones complementarias, si bien las mismas giran todas ellas en función del «destino», siendo allí mismo de inclusión complementos como los de «especial dificultad» y «penosidad». En cambio salvo las guardias no existen complementos específicos, por lo que todos los puestos de trabajo de una misma localidad se remuneran con idéntica percepción económica para la misma categoría funcional, y así cobra lo mismo el oficial o agente judicial que realice embargos o citaciones en la calle que el que atiende el despacho o sala del Juzgado o Tribunal. De ahí la importancia de la introducción del criterio de la relación de puestos de trabajo (RPT) en la nueva norma.

Véase PEDRAZ PENALVA: «Notas sobre la oficina judicial y su reforma», ob. cit., esp. p. 869.

48. En sintonía con el anterior art. 122.1 CE, que distingue por un lado el cuerpo de Jueces y Magistrados y por otro el restante «*personal al servicio de la Administración de Justicia*», por tanto también al Secretario Judicial dentro de este último. La confusión a la que induce la nueva regulación ofrecida por la LOPJ hace que los libros de texto en materia de Derecho Procesal no se pongan de acuerdo en la sistemática ofrecida para el estudio de esta parte orgánica; así, por ejemplo, MONTERO AROCA: *Derecho Jurisdiccional*, t. I, ob. cit., pp. 184 y ss., sigue encuadrando al Secretario Judicial dentro del llamado personal auxiliar junto con los funcionarios ahora objeto de examen; MORENO CATENA, V.: *Introducción al Derecho Procesal*, con CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., 2.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 173 y ss., aun examinado en el mismo tema, lo sitúa fuera de tal personal al servicio de la administración de Justicia; por el contrario, GIMENO SENDRA, V.: *Introducción al Derecho Procesal*, ob. cit., pp. 181 y ss., engloba el examen de la figura del Secretario Judicial dentro del personal jurisdiccional junto con el estatuto jurídico de Jueces y Magistrados.

Consecuencia lógica (o motivación) de la regulación del Secretario Judicial en libro independiente es la exclusiva atribución de competencia en la materia al Ministerio de Justicia a diferencia de lo que tendrá lugar para el «restante» (en su caso) personal al servicio de la administración de Justicia. En la misma línea se pronuncia la Exposición de Motivos del nuevo Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado mediante RD 1608/2005 de 30 de diciembre (BOE de 20 de enero de 2006, núm. 17, pp. 2527 y ss.). Un comentario a este último, así como a la figura del Secretario Judicial en general, se realiza por MARTÍN OSTOS, J. de los S.: «El fedatario judicial en la justicia civil», *Diario La Ley*, núm. 6442, de 16 de marzo de 2006.

49. Si bien tal propuesta deriva en mayor medida de las organizaciones sindicales de Secretarios Judiciales; véase CILLA CALLE, E. en representación de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPS), *Jor-*

Mar Jimeno Bulnes

ya el Consejo General del Poder Judicial en su famosa memoria se mostró poco proclive a esta idea entendiendo que no eran completamente transponibles al ámbito de la administración de Justicia los criterios de las restantes Administraciones Públicas, y que la solución estaba en mejor medida en el establecimiento de relaciones de puestos de trabajo como así tiene lugar⁽⁵⁰⁾. De ahí el mantenimiento de la estructura tripartita actual dentro de los llamados Cuerpos Generales que, junto con los también denominados Cuerpos Especiales, constituyen la actual clasificación de tales nuevos cuerpos al servicio de la administración de Justicia.

1. CLASIFICACIÓN DE CUERPOS

El precepto clave por lo que respecta a la clasificación de los nuevos cuerpos de funcionarios al servicio de la administración de Justicia en la línea previamente anticipada por el art. 474 LOPJ lo constituye a su vez el posterior art. 475 LOPJ. Este último precepto se ocupa así de establecer los nuevos cuerpos de funcionarios de carrera con destino en la administración de Justicia sin perjuicio de que junto a ellos puedan prestar igualmente servicios en la administración de Justicia: a) funcionarios de otras Administraciones «para la realización de funciones concretas y especializadas»⁽⁵¹⁾; b) funcionarios interinos conforme regulación del art. 472.2 LOPJ, y c) personal laboral en defecto de cuerpo o escala técnica específica en la materia que se precise, con carácter indefinido o temporal⁽⁵²⁾.

nadas de estudio «la oficina judicial: hacia un nuevo modelo», ob. cit., pp. 95 y ss., esp. p. 106. Por el contrario, otras organizaciones sindicales optan por el mantenimiento de la estructura tripartita (o a lo sumo bipartita); así, y en la misma obra, TRIGUEROS DORADO, J., representante del sector de la Administración de Justicia de FSAP-CC.OO., pp. 77 y ss., esp. p. 83. Tal fue también la propuesta de MARTÍN CONTRERAS, L., uno de los mayores impulsores y participantes en el proceso de reforma de la oficina judicial como así lo puso de relieve en sus conclusiones de la ponencia «La reforma de la Oficina Judicial» arriba mencionada, p. 726, recuerdo además que hace en fecha reciente en «Un nuevo diseño para la oficina judicial», ob. cit., p. 2.

50. *Libro blanco de la Justicia*, ob. cit., p. 135.

51. Art. 474.3 LOPJ y en la misma línea art. 473.1 LOPJ en referencia al requerimiento de «*conocimientos técnicos o especializados*» que hacen preciso el auxilio a la administración de Justicia por parte de otros funcionarios con «*carácter ocasional o permanente*». Así, por ejemplo, los funcionarios de la Oficina de interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación o del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

52. Tal es el caso de los profesionales titulados en Psicología y Pedagogía o diplomados como Trabajadores Sociales que auxilian a los Juzgados de Familia o Menores y que están sujetos al contrato de trabajo por

Por su parte el art. 475 LOPJ procede como es sabido a realizar una clasificación inicial entre dos categorías generales, cuales son los ahora denominados Cuerpos Generales y Cuerpos Especiales, estableciendo a su vez en cada una de ellas los distintos cuerpos de funcionarios, algunos en sustitución de los anteriores y otros de novedosa introducción que se suman a los primeros. No obstante hay que decir que, incluso respecto de aquellos cuerpos en los que opera esta que llamamos «sustitución», puede hablarse asimismo de nueva creación, por cuanto no sólo se produce la extinción de los anteriores cuerpos de funcionarios hasta la fecha existentes, sino que existe una nueva regulación respecto de su estatuto jurídico y funciones, así como una lógica mejora salarial⁽⁵³⁾. La reforma de la legislación orgánica ha sido por ello no sólo de carácter formal sino también, y de forma importante, de carácter material.

1.1. *Cuerpos Generales*

A tenor de la propia definición contenida en el art. 475.a) LOPJ, tales cuerpos serán aquellos que se ocupen del desarrollo de «*tareas de contenido procesal, sin perjuicio de la realización de funciones administrativas vinculadas a las anteriores*». A su vez se procede a una ulterior clasificación tripartita de tales Cuerpos Generales en sustitución de los anteriores Oficiales, Auxiliares y Agentes judiciales, presentándose si acaso como característica común

ellos firmado y al convenio colectivo de su ramo conforme el art. 474.4 LOPJ. También constituye personal de este tipo aquel personal que la ley denomina de carácter instrumental, correspondiente a «*áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos o instalaciones u otras análogas*» (art. 473.2 LPJ), léase personal de limpieza, asistencia de equipos informáticos, etc.

53. De este modo MARTÍN CONTRERAS: «Un nuevo diseño para la oficina judicial», ob. cit., p. 5. Véase a este respecto el cuadro de retribuciones aplicable a los nuevos cuerpos generales para 2005; a modo de ejemplo, se establece un sueldo base para gestores procesales de 1.091,62 €, de 873,30 € para los tramitadores procesales y de 764,14 € para el cuerpo de auxilio judicial, cantidades a las que se suman los respectivos trienios (mayor cuantía en los supuestos de adquisición con posterioridad a la fecha de 1 de enero de 2004), complementos (transitorio de puesto, de especial dificultad, de penosidad además de los correspondientes por ámbito territorial de diferente cuantía en función de las respectivas Comunidades Autónomas y/o ámbito de competencia del Ministerio) y guardias. Por cierto que las diferencias entre Comunidades Autónomas son notables (por ejemplo, la máxima es Navarra con 230 € y la mínima el ámbito territorial del Ministerio que opera aún en nuestra Comunidad Autónoma, con 60 € mensuales); estas diferencias entre los complementos autonómicos también se acusan en el caso de otros cuerpos de funcionarios de la Administración Pública, por ejemplo en el ámbito universitario.

Mar Jimeno Bulnes

más destacable la elevación de la calificación profesional ⁽⁵⁴⁾ de los nuevos cuerpos de funcionarios en consonancia con las sugerencias vertidas en este sentido, a fin de justificar jurídicamente la realización de tareas que hasta ahora les venía siendo encomendadas por sustitución o delegación ⁽⁵⁵⁾. Esta recalificación profesional se corresponde asimismo con la atribución de un nuevo reparto de funciones también de mayor envergadura procesal, las cuales, por otra parte, son determinadas de forma concreta y taxativa en la propia legislación orgánica con supresión de cualesquiera regímenes de sustitución o delegación; de este modo se finaliza con la tradicional confusión o indefinición de tareas entre funcionarios de una y otra categoría.

Así pues, la nueva regulación procesal estableciendo la anunciada clasificación tripartita presenta las siguientes líneas generales ⁽⁵⁶⁾ en comparación con la anterior y, en su caso, la ofrecida por el RD 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la administración de Justicia ⁽⁵⁷⁾. Si acaso como característica común a las funciones ahora atribuidas a los nuevos cuerpos cabe destacar una elevación de éstas con respecto a las hasta ahora legalmente atribuidas —que no siempre en la práctica realizadas— a los cuerpos

54. Recuérdese que en virtud del anterior art. 490 LOPJ los requisitos de titulación legalmente exigidos eran el título de Bachiller para Oficiales, Graduado Escolar para Auxiliares y certificado de escolaridad para Agentes judiciales o equivalentes.

55. Así, PEDRAZ PENALVA: «Notas sobre la oficina judicial y su reforma», ob. cit., esp. pp. 857 y 867 proponiendo ya a la fecha de 1989 que los oficiales fueran diplomados, los Auxiliares bachilleres y los Agentes graduados escolares. En el mismo sentido NABAL RECIO, A.: «El actual régimen jurídico interno de toma de decisiones en los órganos judiciales. Intervención de los distintos cuerpos de funcionarios. Líneas generales para su posible reforma en los cuatro órdenes jurisdiccionales. Su incidencia en la Ley Orgánica del Poder Judicial», *Materiales para una Reforma Procesal*, ob. cit., pp. 881 y ss., esp. 891.

56. V. ESCUDERO MORATALLA, J.F., ALFÉREZ DEL MORAL, D., ALIAGA CASANOVA, A.C. y GÓMEZ ARROYO, J.L.: *El Secretario Judicial: Últimas reformas orgánicas conforme a la Ley 19/2003, de 23 de diciembre*, Revista General del Derecho, Valencia, 2004, pp. 43 y ss.; CARRETERO GONZÁLEZ, C.: «Estructura y funcionamiento de la oficina jurídica», ob. cit., pp. 167 y ss.; MARÍN MORATO: «El nuevo modelo de oficina judicial», ob. cit., pp. 183 y ss.; y fundamentalmente, RODRÍGUEZ RIVERA: «Funciones de los Secretarios Judiciales y del resto de cuerpos de funcionarios...», ob. cit., pp. 1433 y ss.

57. Si bien la LO 19/2003 no realiza derogación expresa de éste sí habrá de entenderse que ha tenido lugar tácitamente a tenor de la disposición final 1.^a conforme a la cual se prevé el dictado de sendos reglamentos, por una parte regulador del ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, y por otra relativo al régimen disciplinario, que ya ha tenido lugar para el conjunto de tales cuerpos Generales y Especiales mediante RR.DD. 1451/2005, de 7 de diciembre y 796/2005, de 1 de julio, respectivamente.

que son objeto de sustitución en consonancia, asimismo, con la mayor asunción de competencias por parte del Secretario Judicial ⁽⁵⁸⁾.

1.1.1. Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, con exigencia ahora de Diplomatura universitaria o Ingeniería/Arquitectura Técnica o graduación equivalente ⁽⁵⁹⁾ y cuya posesión por los antiguos Oficiales al servicio de la administración de Justicia provoca su integración inmediata en el nuevo cuerpo con efectos del pasado 1 de enero de 2004 a tenor de la disposición adicional 4.ª 1 LO 19/2003 ⁽⁶⁰⁾. La relación de sus funciones de indudable contenido procesal es ahora contemplada en la propia legislación orgánica, concretamente en el art. 476 LOPJ, por lo que habrá de entenderse vacío de contenido el art. 3.2 RD 249/1996 ⁽⁶¹⁾. A mayor abundamiento la nueva regulación define al nuevo Gestor procesal y administrativo como «*colaborador en la actividad procesal de nivel superior*», carácter que se traduce en la realización de tareas procesales que ahora le son propias, siempre bajo el imperio del principio de jerarquía legalmente enunciado ⁽⁶²⁾. Así a tenor de la nueva regulación se procede a realizar una enumeración de las concretas funciones atribuidas a este cuerpo, y entre ellas sin duda la principal es la contemplada en el art. 476.a) LOPJ, esto es la gestión de la tramitación procesal.

58. Nuevas competencias al menos de carácter procesal en virtud del art. 456.3 LOPJ (ejecución, jurisdicción voluntaria y conciliaciones) a semejanza de las que operan para el *Rechtspfleger* en Alemania y a cuyo modelo se tiende; en esta línea, SEOANE CACHARRÓN, J.: «Configuración del secretario Judicial de una moderna Oficina Judicial, soporte del nuevo modelo de proceso», *Materiales para una reforma procesal*, ob. cit., pp. 637 y ss., esp. pp. 50 y ss. con bibliografía allí citada, y más recientemente, DORADO PICÓN, A.: «El Secretario Judicial y la oficina judicial tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial», *Revista de Derecho Procesal*, 2004, núm. 1-3, pp. 213 y ss. Así también sobre la figura alemana, más ampliamente, PRIETO-CASTRO Y FERRÁNDIZ, L.: «El Rechtspfleger», *Libro Homenaje a Jaime Guasp*, Comares, Granada, 1984, pp. 475 y ss.

59. Art. 475.a) LOPJ. Esta equivalencia puede extenderse al cursado de tres años de carrera universitaria, pese a la dificultad de establecer criterios generales en el ámbito universitario, más aún en el proceso de transformación de Planes de Estudio que opera en la universidad española con motivo del necesario ajuste a nivel de la Unión Europea a partir de la conocida como *Magna Charta Universitatum*, adoptada en Bolonia en 1988.

60. Por el contrario aquellos que no posean el citado requisito de titulación ahora legalmente exigido se integrarán en la denominada escala a extinguir del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa a tenor de la disposición adicional 4.ª 6 LO 19/2003.

61. Especialmente en su letra b), relativa a la realización de tareas derivadas de la habilitación que de tales Oficiales podía tener lugar para la autorización de actas en presencia judicial así como de diligencias de constancia y comunicación en virtud del antiguo art. 282 LOPJ, hoy derogado por la disposición adicional 6.ª LO 19/2003.

62. Recuérdese el contenido de los nuevos arts. 454.2 y 457 LOPJ en atribución al Secretario Judicial de la dirección técnico-procesal del personal integrante de la oficina judicial.

Mar Jimeno Bulnes

Hasta ahora el art. 3.2.a) RD 249/1996 atribuía a los Oficiales «*la tramitación de toda clase de procesos, diligencias, expedientes y, en general, de cualesquiera actuaciones*» atribuidas al concreto órgano jurisdiccional, constituyendo esta su competencia principal. Sin embargo dicha tarea de tramitación procesal o, expresamente, «tramitación de procedimientos» es ahora atribuida con carácter general al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, por lo que habremos de entender que corresponde ahora al nuevo gestor procesal una tarea superior y en suma supervisora⁽⁶³⁾ de la realizada por los nuevos tramitadores procesales; ello es asimismo corroborado por la ley al determinar la obligación de dar cuenta al Secretario Judicial (o en su caso al propio Juez o tribunal si así lo requiriera⁽⁶⁴⁾) en los supuestos en que sea preciso la «*interpretación de ley o normas procesales*». Es por esta razón que, en sentido contrario, el gestor procesal procederá de ordinario a la «*aplicación*» de preceptos procesales por su cuenta y riesgo, encargándose de la tramitación de los asuntos de su competencia con carácter general.

Así también y de forma específica se le atribuyen otras funciones concretas y determinadas que pueden subdividirse a su vez en tareas de carácter procesal y administrativo. Entre las primeras destacan: a) Práctica y firma de comparecencias efectuadas por las partes procesales con «*capacidad de certificación*»⁽⁶⁵⁾; b) Documentación de embargos, lanzamientos y cualesquiera otros actos procesales que así lo exijan⁽⁶⁶⁾; c) Unión de documenta-

63. Así también RODRÍGUEZ RIVERA: «Funciones de los Secretarios Judiciales y del resto de cuerpos de funcionarios...», ob. cit., p. 1.435. No en vano los anteriores Oficiales se ocupaban de la completa tramitación de todos los procedimientos judiciales «*desde su iniciación hasta su final*»; en este sentido, HERRERA CAS-CÓN, M.: «La función de los oficiales...», ob. cit., p. 17.

64. Téngase en cuenta que el art. 436.6 LOPJ dispone expresamente que «*los Jueces y Magistrados, en las causas cuyo conocimiento tengan atribuido, podrán requerir en todo momento al funcionario responsable cuanta información consideren necesaria*».

65. Entendiendo que opera la certificación del contenido de dicha comparecencia bajo la fórmula de «*certifico*», no así la de «*dar fe*», exclusiva del Secretario Judicial en cuanto que el actual art. 453.1 LOPJ atribuye a este último «*en exclusividad y plenitud el ejercicio de la fe pública judicial*»; asimismo y en virtud del mismo precepto corresponde con carácter general también a este último la expedición de certificaciones y testimonios de actuaciones judiciales «*no declaradas secretas ni reservadas para las partes*» (art. 436.2 LOPJ). Por ello a los nuevos gestores sólo se les dota de competencia con carácter aislado para certificar tales comparecencias parciales, siempre y cuando en ellas, claro está, no tenga lugar la presencia judicial ni se practique apoderamiento *apud acta* alguno, función que compete igualmente al Secretario Judicial (arts. 453.3 LOPJ y, por ejemplo, 24 LEC).

66. Si bien ha de recordarse que la función de documentación con carácter general pertenece también al Secretario Judicial en virtud del art. 454.1 LOPJ. De la misma forma que en el caso anterior, la documentación aquí realizada por los gestores procesales no podrá tener lugar respecto de actuaciones que exijan pre-

ción a los autos sin carácter probatorio y elaboración de notas que pueden ser de referencia, resumen de autos y de examen de trámite⁽⁶⁷⁾; d) Registro, recepción y distribución de escritos y documentos relativos a los autos en tramitación⁽⁶⁸⁾; e) Expedición de copias simples de escritos y documentos obrantes en autos a costa de los interesados⁽⁶⁹⁾. Entre las funciones administrativas se contempla: 1) Ocupación de jefaturas que configuran las unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales de acuerdo con las relaciones de puesto de trabajo (RPT) en concreto establecidas, asumiendo funciones de gestión respecto de la distribución de tareas entre el restante personal a modo de «Jefe de Sección»; 2) Colaboración con órganos competentes en materia de gestión administrativa (Ministerio de Justicia o Comunidades Autónomas) con competencia en materia de gestión de medios materiales y personales en las correspondientes unidades de oficina judicial si tal función se atribuye a dicho puesto de trabajo en la correspondiente RPT.

Por último la ley les capacita para realizar tareas correspondientes al Secretario Judicial en dos situaciones concretas: A) Para el caso de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz así como de los Juzgados de Paz (bien en poblaciones de más de 7.000 habitantes o de menos si la carga de trabajo justifica su establecimiento); B) En el supuesto de nombramiento como secretarios sustitutos si reunieran los requisitos legalmente para ello exigidos (entre ellos la titulación y, en concreto, la Licenciatura en Derecho) con atención al procedimiento que reglamentariamente se establezca. Tras la enumeración de todas estas funciones se incluye una cláusula residual que faculta a estos funcionarios para «*la realización de todas aquellas funciones*

sencia judicial y se realizará bajo la anterior fórmula de certificación; en esta línea RODRÍGUEZ RIVERA: «Funciones de los Secretarios Judiciales y del resto de cuerpos de funcionarios...», ob. cit., p. 1.435. En cambio la práctica de la ejecución de tales embargos y lanzamientos corresponde al cuerpo de Auxilio Judicial en virtud del art. 478.b) LOPJ como antaño para los Agentes judiciales [art. 9.2.b) RD 249/1996].

67. Sobre el contenido de las mismas véase MARTÍN MORATO: «El nuevo modelo de oficina judicial», ob. cit., p. 184. Textualmente se dice que «*notas de referencia son aquellas que se hacen en los autos para remitirse a un escrito o a otra actuación*» mientras que las «*notas de resumen de autos consisten en un resumen o extracto que se ha de hacer a disposición del Tribunal cuando la ley lo disponga*» y «*notas de examen a trámite aluden al estudio que ha de hacerse sobre el trámite a seguir en un proceso*».

68. Esta última función y la anterior pueden entenderse derivadas de la anterior principal de gestión de la tramitación procesal; así, RODRÍGUEZ RIVERA: «Funciones de los Secretarios Judiciales y del resto de cuerpos de funcionarios...», ob. cit., p. 1.435.

69. Función que deriva del derecho de los interesados a la obtención de tales copias y del deber del Secretario Judicial de procurar dicha información en virtud del art. 234 LOPJ.

que legal o reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga que, inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias»⁽⁷⁰⁾.

Se observa la supeditación del desarrollo de todas las funciones enumeradas a la concreta relación de puestos de trabajo de acuerdo con la disposición general contenida en el art. 435.4 LOPJ, que establece la ordenación de los puestos de trabajo a desempeñar por los nuevos cuerpos de funcionarios «*de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo*», motivo por el que la disposición transitoria 4.^a LO 19/2003 conmina al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas a elaborar y aprobar dichas relaciones de puestos de trabajo además de proceder a la organización de la oficina judicial y unidades administrativas. A tal fin, y según la nueva estructura dispuesta para la oficina judicial en unidades procesales de apoyo directo (UPAD) y servicios comunes procesales (SCP)⁽⁷¹⁾, ha de recordarse que la reciente Orden JUS/3244/2005, de 18 de octubre, por la que se determina la dotación básica de las unidades procesales de apoyo directo a los órganos jurisdiccionales⁽⁷²⁾, garantiza al menos la presencia de un gestor procesal y administrativo en la UPAD de cada Juzgado o Tribunal aplicable a todos los ordenes jurisdiccionales, excepción hecha de modo concreto para los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el ámbito penal, además de los Juzgados mixtos de Primera Instancia e Instrucción, donde el número mínimo es de dos⁽⁷³⁾.

1.1.2. Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, siendo ahora exigido para la pertenencia a este nuevo cuerpo la posesión del título de Bachiller o equivalente y en el que se han integrado de forma inmediata siempre que

70. Art. 476.k) LOPJ. Se critica la inclusión de esta cláusula de contenido residual «*que incluye demasiados conceptos jurídicos indeterminados*» pudiendo dar lugar a múltiples conflictos como antaño al no establecerse una concreta determinación de competencias para cada uno de los cuerpos de funcionarios competentes en materia de administración de Justicia, ello a salvo de lo que establezcan las correspondientes disposiciones reglamentarias en desarrollo de la norma legal. Tal es la crítica vertida por RODRÍGUEZ RIVERA: «*Funciones de los Secretarios Judiciales y del resto de cuerpos de funcionarios...*», ob. cit., p. 1.436.

71. Arts. 436.1 y 2. Consúltense asimismo el documento relativo a la *Propuesta sobre nuevo diseño de la oficina judicial* elaborado por el Ministerio de Justicia.

72. BOE de 20 de octubre de 2005, núm. 251, pp. 34221 y ss.

73. V. anexo relativo a las dotaciones básicas de las unidades procesales de apoyo directo (UPAD).

ostentaran dicha titulación los antiguos Auxiliares al servicio de la administración de Justicia desde la fecha antes citada de 1 de enero de 2004 a tenor de la disposición adicional 4.^a 3 LO 19/2003⁽⁷⁴⁾. Sus funciones se enumeran en el art. 477 LOPJ tras la definición de este nuevo cuerpo como cuerpo de «*apoyo a la gestión procesal, según el nivel de especialización del puesto desempeñado, bajo el principio de jerarquía y de conformidad con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo*»⁽⁷⁵⁾.

De este modo y en la línea previamente anticipada, se atribuye al nuevo cuerpo de tramitadores procesales y administrativos con carácter general la tramitación procesal y/o «*tramitación general de procedimientos*» en la línea enunciada por el propio art. 477.a) LOPJ; constituye así esta primera función legalmente determinada sin duda la principal y genérica del nuevo cuerpo y la que en alguna medida ya venían realizando en la práctica diaria de Juzgados y Tribunales los anteriores Auxiliares al servicio de la administración de Justicia⁽⁷⁶⁾. La nueva regulación ofrece por tanto una mejora y una mayor sintonía con la realidad social respecto del hasta ahora vigente art. 9.1.a) RD 249/1996 que simplemente les encomendaba la función de «*colaborar en el desarrollo general de la tramitación procesal*»; ahora en cambio se les autoriza legalmente a «*pensar*» y no únicamente a «*reproducir*»⁽⁷⁷⁾.

La ley prevé además expresamente la metodología para llevar a cabo esta función de tramitación procedimental; de este modo el empleo de los ante-

74. Por el contrario aquellos que no posean el citado requisito de titulación ahora legalmente exigido se integrarán en la denominada escala a extinguir del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa a tenor de la disposición adicional 4.^a 6 LO 19/2003.

75. En virtud de dicho principio de jerarquía y dado su apoyo a la gestión procesal ha de entenderse que tales funcionarios dependen directa e inmediatamente del anterior cuerpo de Gestión y Tramitación procesal y, lógicamente, en último término del Secretario Judicial; en esta línea, GIMENO SENDRA: *Introducción al Derecho Procesal*, ob. cit., p. 204.

76. No en vano, y en la línea ya anticipada, se prestaban a confusión las tareas diarias realizadas por Auxiliares y Oficiales hasta el punto de que los primeros actuaban en gran parte de las ocasiones y «*con contadas excepciones, como un buen Oficial*»; expresamente, RODRÍGUEZ RIVERA: «*Funciones de los Secretarios Judiciales y del resto de cuerpos de funcionarios...*», ob. cit., p. 1437.

77. Bien de los textos previamente proporcionados, bien del desarrollo de las actuaciones judiciales de carácter oral (vistas públicas), si el Secretario Judicial no procede por sí mismo a la elaboración manual o informática del acta, etc. Todavía es frecuente en Juzgados y Tribunales la entrega de material manuscrito (ej. Ponencias de autos o sentencias) para su correspondiente transcripción informática, y en todo caso se encargan estos funcionarios de componer la correspondiente resolución jurisdiccional (v.gr. inclusión de encauzamiento y antecedentes de hecho) a partir de la entrega del contenido fundamental (léase motivación y/o fundamentos jurídicos) en soporte informático.

Mar Jimeno Bulnes

riores «*procedimientos mecánicos, mecanográficos, taquígrafos u otros análogos*» para realizar la transcripción de textos prevista en el citado art. 9.1.a) RD 249/1996 se sustituye ahora por el empleo de medios «*mecánicos y ofimáticos*» en consonancia con la llegada también —y afortunadamente— de las nuevas tecnologías al Palacio de Justicia ⁽⁷⁸⁾. Por ello tales medios tecnológicos —en suma, equipos informáticos— servirán para la confección de «*documentos, actas, diligencias, notificaciones y otros*», así como las oportunas copias y la unión de éstas a los expedientes.

Asimismo, y como tareas específicas de carácter procesal además de la principal reseñada, se les encomienda otras tales como, en concreto: a) Registro y clasificación de correspondencia ⁽⁷⁹⁾; b) Formación de autos y expedientes ⁽⁸⁰⁾; c) Confección de cédulas para la práctica de actos de comunicación ⁽⁸¹⁾. De la misma forma y en segundo lugar se atribuyen a este cuerpo tareas de carácter administrativo como son, en concreto y a similitud de las que tenían lugar para el anterior cuerpo de Gestión y Tramitación procesal, 1) el desempeño de las jefaturas que les sean asignadas en las correspondientes relaciones de puesto de trabajo (RPT), y 2) la ocupación de puestos en las unidades administrativas cuando reúnan los requisitos y conocimientos para ello exigi-

78. Sobre esta materia, por todos, DE HOYOS SANCHO, M.: «Actos procesales de notificación y nuevas tecnologías», *Diario La Ley*, núm. 5751, de 1 de abril de 2003; así también CABEZUDO RODRÍGUEZ, N.: «La Administración de Justicia ante las innovaciones tecnológicas. Del entusiasmo a la desconfianza pasando por el olvido legal», *Revista Jurídica de Castilla y León*, núm. 7, 2005, pp. 155 y ss., y PÉREZ GIL, J.: «El uso de las NTI en la mejor gestión procesal», *Noticias Jurídicas*, octubre-noviembre de 2002, <www.njbosch.com>.

79. Que no registro y recepción de escritos y documentos en tramitación, tarea atribuida al cuerpo de Gestión y tramitación procesal en virtud del anterior art. 476.e) LOPJ según se expuso más arriba.

80. Se añade bajo la supervisión del superior jerárquico, aun cuando ya de modo inicial se ha dejado constancia de la vigencia del principio de jerarquía. Si acaso ha de entenderse esta referencia expresa como la atribución de responsabilidad al superior jerárquico —léase Gestor procesal o, en último término, Secretario Judicial— respecto de las omisiones en que se pudiera incurrir en expresión de la máxima clásica «*lo que no consta en autos no está en el mundo*». Dicha formación se realiza físicamente mediante el sistema de grapado o incluso aún «cosido» como antaño, práctica todavía habitual en otros países (por ejemplo, Argentina).

81. A pesar de que el art. 9.1.d) RD 249/1996 encomendaba a los antiguos Auxiliares al servicio de la administración de Justicia la concreta práctica de los actos de comunicación atribuida por ley siempre que no correspondiera a otros funcionarios, ahora dicha ejecución material es posteriormente encomendada al Cuerpo de Auxilio Judicial en virtud del art. 478.a) LOPJ. Sin embargo, todavía a tenor de la legislación procesal vigente, tal realización material puede ser encomendada a cualesquiera funcionarios; así por ejemplo, art. 152.1 LEC que previene la realización material de los actos de comunicación por el Secretario Judicial o «*funcionario que aquél designe*». Es por ello que este precepto y otros procesales habrán de ser objeto de reforma a tenor del mandato de la disposición final 2.^a LO 19/2003 en exigencia de adecuación de la legislación procesal a la presente orgánica en el plazo de *un año* (la cursiva es nuestra).

dos en la correspondiente relación de puesto de trabajo (RPT). Por último se procede a la inclusión también ⁽⁸²⁾ de una cláusula residual que permita el desarrollo por estos funcionarios de cualesquiera otras funciones legal o reglamentariamente establecidas y otras similares inherentes a su puesto de trabajo y asimismo encomendadas por sus superiores jerárquicos.

Finalmente, y en cuanto a la concreta ordenación y establecimiento de puestos de trabajo para el cuerpo de Tramitadores procesales y administrativos, la anterior Orden JUS/3244/2005, de 18 de octubre, por la que se determina la dotación básica de las unidades procesales de apoyo directo a los órganos jurisdiccionales, dispone la presencia mínima de un tramitador procesal y administrativo en la UPAD de cada Juzgado o Tribunal para todos los órdenes jurisdiccionales, a excepción hecha, de modo concreto, para los Juzgados de Instrucción, Vigilancia Penitenciaria ⁽⁸³⁾ y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el ámbito penal, además de los Juzgados mixtos de Primera Instancia e Instrucción, donde el número mínimo es de dos ⁽⁸⁴⁾.

1.1.3. Cuerpo de Auxilio Judicial, siendo ahora exigido para el ingreso en él el título de graduado en ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) o equivalente y al que se han integrado de forma inmediata los antiguos Agentes judiciales en posesión de dicha titulación desde la fecha antes citada de 1 de enero de 2004 a tenor de la disposición adicional 4.ª 5 LO 19/2003 ⁽⁸⁵⁾. La numeración de sus funciones se realiza en el art. 478 LOPJ, igualmente con atención al principio de jerarquía y de acuerdo con lo establecido en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo (RPT), asumiendo con carácter general «*la realización de cuantas tareas tengan carácter de auxilio de los órganos judiciales*».

En concreto el citado precepto les encomienda diversas funciones de carácter procesal, y así: a) Práctica de actos de comunicación consistentes en notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos con «*capacidad*

82. Recuérdese el anterior 476.k) LOPJ para el cuerpo de Gestión y Tramitación procesal, así como los comentarios al respecto.

83. Novedad respecto de la dotación prevista para el cuerpo de Gestión y tramitación procesal cuya dotación mínima no consta —ni es, por tanto, prevista— a tenor del anexo que acompaña dicha norma.

84. V. anexo relativo a las dotaciones básicas de las unidades procesales de apoyo directo (UPAD).

85. Por el contrario aquellos que no posean el citado requisito de titulación ahora legalmente exigido se integrarán en la denominada escala a extinguir del Cuerpo de Auxilio Judicial a tenor de la disposición adicional 4.ª 6 LO 19/2003.

Mar Jimeno Bulnes

de certificación»⁽⁸⁶⁾; b) Ejecución de embargos, lanzamientos y demás actos de similar naturaleza en calidad de agente de la autoridad⁽⁸⁷⁾; c) Actuaciones pertenecientes a la Policía Judicial en calidad asimismo de agente de autoridad y sin perjuicio de las funciones de carácter penal adscritas a este cuerpo⁽⁸⁸⁾; d) Archivo de autos y expedientes judiciales⁽⁸⁹⁾; e) Vigilancia de las condiciones y empleo así como mantenimiento del orden en las salas de vistas; d) Comprobación y manejo de empleo de medios técnicos aptos para la reproducción de las actuaciones procesales de carácter oral con asistencia del servicio técnico competente en caso necesario y dando cuenta al Secretario Judicial de las anomalías que pudieran producirse⁽⁹⁰⁾.

Así también y en segundo lugar, al igual que ocurría con los anteriores cuerpos, se atribuye a estos funcionarios tareas de carácter administrativo como

86. Esto es, certificación del contenido del acto de comunicación practicado consistente en cualesquiera de los enunciados en dicho precepto así como en otros procesales, por ejemplo art. 149.1 LEC, que añade además mandamientos y oficios; dado que estos últimos tienen como destinatarios a otros funcionarios públicos su práctica habitual tiene lugar por otros medios de comunicación (fax, correo electrónico, etc.). Como ha sido dicho la nueva legislación orgánica atribuye en exclusiva a estos funcionarios la ejecución material de los actos de comunicación a diferencia de la regulación orgánica anterior, cuyo art. 279.3 LOPJ encomendaba al Secretario Judicial la práctica de notificaciones u otros actos de comunicación o en funcionarios que este delegue conforme a la normativa procesal aún vigente (art. 152 LEC), compartiendo así los anteriores Agentes judiciales también esta tarea con otros funcionarios en virtud del art. 9.2.c) RD 249/1996.

87. Competencia ya atribuida en virtud del art. 9.2.b) RD 249/1996. Como es sabido la documentación de tales actos pertenece al cuerpo de Gestión y Tramitación Procesal en virtud del art. 476.c) LOPJ.

88. Competencia también ya contemplada a tenor del art. 9.2.d) RD 249/1996.

89. Bajo expresa supervisión del Secretario Judicial a diferencia de la referencia genérica hecha en anterior art. 477.c) LOPJ para el cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa encargado de la formación de éstos. Este archivo ya tradicionalmente realizado por los anteriores agentes judiciales está ausente en cambio de la enumeración de los arts.15.2 y 3 RD 249/1996 y se refiere al denominado «archivo de gestión» que, a diferencia del archivo central o histórico, es *«aquel en el que se han de conservar, en la propia oficina judicial, los expedientes vivos que genera la misma en el desarrollo de sus funciones o actividades»* y así documentación activa por estar *«en proceso de tramitación, por su frecuente consulta o porque aún está en fase de archivo provisional»*; así, RODRÍGUEZ RIVERA: «Funciones de los Secretarios Judiciales y del resto de cuerpos de funcionarios...», ob. cit., p. 1440.

90. La lectura de este precepto ha de hacerse en coordinación con el art. 230 LOPJ en previsión de cualesquiera *«medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo y documentación de las actuaciones judiciales»*. Era necesaria la atribución de competencia en este sentido a alguno de los nuevos cuerpos en función de la exigencia establecida ahora para el proceso civil en virtud del art. 147 LEC respecto de la documentación de las actuaciones orales en vistas públicas y comparecencias mediante soporte apto para la grabación y reproducción del sonido e imagen; dicho precepto procesal atribuye la dación de fe de tal grabación al Secretario Judicial, de ahí su responsabilidad en ella y la importancia de ponerle en conocimiento de cualesquiera fallos técnicos que pudieran y pueden sin duda provocar la propia nulidad de tales actos judiciales de conformidad con el art. 238.3.º LOPJ (infracción de normas esenciales de procedimiento que producen indefensión).

son: 1) el desempeño de las jefaturas que sean asignadas a este cuerpo en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo (RPT), y 2) la ocupación de puestos en las unidades administrativas cuando reúnan los requisitos y conocimientos para ello exigidos en la correspondiente RPT. Por último se establece como es habitual una cláusula general que permite la realización por parte del nuevo cuerpo de auxilio judicial cualesquiera otras funciones legal o reglamentariamente establecidas y otras análogas inherentes a su puesto de trabajo cuando sean encomendadas por sus superiores jerárquicos.

No obstante y para este nuevo cuerpo se echa quizás en falta la especificación de otras importantes tareas hasta ahora contenidas en la enumeración realizada por los arts. 15.2 y 3 RD 249/1996 —quizás en exceso casuística⁽⁹¹⁾—, cuya omisión puede derivar y de hecho deriva en la indeterminación del cuerpo de funcionarios, dentro de los reseñados, competente para el desempeño de éstas. Así en concreto se plantea por ejemplo el tema de la «*utilización de máquinas fotocopiadoras, encuadernadoras y similares*» ausente de la relación contenida en el art. 478 LOPJ y hasta ahora encomendada a los anteriores Agentes de la administración de Justicia⁽⁹²⁾. Otras tareas concretamente enumeradas en la anterior regulación —vigilancia, custodia, porteo, apertura y cierre de dependencias, recepción y distribución de correspondencia en su caso⁽⁹³⁾, realización de encargos— parecen plantear en la práctica menos problemas, y así la asunción habitual por este último grupo de funcionarios del cuerpo de Auxilio Judicial.

1.2. *Cuerpos Especiales*

Tras la enumeración contenida por el anterior art. 475 LOPJ respecto de los Generales, se hace también en idéntico precepto una definición de aquellos de carácter especial, por cuanto su cometido supone esencialmente «*el desem-*

91. De esta opinión PEDRAZ PENALVA: «Notas sobre la oficina judicial y su reforma», ob. cit., p. 857.

92. Art. 15.3.g) RD 249/1996. Ello hace que en la práctica esta tarea sea realizada indistintamente por uno u otro cuerpo de funcionarios según Juzgados y Tribunales: gestores, tramitadores procesales o, en su caso, este cuerpo de auxilio judicial.

93. Recuérdese que al nuevo cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa le está encomendado únicamente el «*registro y la clasificación de la correspondencia*» [art. 477.b) LOPJ].

Mar Jimeno Bulnes

peño de funciones objeto de una profesión o titulación específica», distinta claro está a la titulación jurídica. No obstante existe una diferencia fundamental en relación con unos y otros cuerpos, cual es que estos últimos no están propiamente integrados dentro de la oficina judicial⁽⁹⁴⁾, por cuanto su ubicación reside en dependencias e instituciones distintas de las judiciales. Es por ello que aquí y ahora se realiza una referencia puntual a ellos.

Dentro de la relación recogida por el citado art. 475 LOPJ procede contemplar en primer lugar el Cuerpo de Médicos Forenses, para cuya adscripción se exige legalmente la posesión de la Licenciatura en Medicina. Con antecedente en los antiguos facultativos forenses como ha sido ya más arriba expuesto, sin embargo no tuvo lugar la formación de este cuerpo hasta la promulgación de la actual LOPJ pese a las reclamaciones hechas en este sentido desde fechas muy anteriores⁽⁹⁵⁾. La LO 19/2003 acomete también alguna reforma respecto de la anterior regulación relativa al estatuto jurídico de estos profesionales de la Medicina⁽⁹⁶⁾, y así habrá de tenerse en cuenta la nueva redacción ofrecida por el actual art. 479 LOPJ que en alguna medida modifica también el hasta ahora vigente RD 296/1996, de 23 de febrero, regulador del Reglamento orgánico de este cuerpo⁽⁹⁷⁾.

A tenor de la legislación orgánica la ubicación del cuerpo de médicos forenses tiene lugar, como ha sido dicho, fuera de la oficina judicial y en concreto en los Institutos de Medicina Legal y/o Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con carácter general; sólo excepcionalmente y si así se precisa podrán ser «*adscritos a órganos jurisdiccionales, fiscalías u oficinas del Registro Ci-*

94. Así, MARTÍN MORATO: «El nuevo modelo de oficina judicial», ob. cit., p. 186.

95. En concreto pueden aquí recogerse las palabras textuales de ORTIZ DE ZÚÑIGA: *Práctica general forense*, ob. cit., p. 109: «*es una necesidad de la justicia el establecimiento de facultativos forenses, dotados decorosamente, para auxiliar á los juzgados y tribunales en los numerosos casos en que estos deben ilustrar su juicio con el dictamen pericial de aquellos; pero desgraciadamente no los hay más que en Madrid, con una corta duración*». En términos similares, JURADO, S.: «El médico forense en la labor judicial», ob. cit., p. 9, afirmando que sus informes llegan a constituir «*el hecho o premisa del juicio que cierra su ciclo con la aplicación del precepto legal*».

96. Más ampliamente LACABA SÁNCHEZ, F.: «Valor procesal de la actuación del médico forense», *Diario La Ley*, núm. 6130, de 18 de noviembre de 2004.

97. Modificado por RD 1619/1997, de 24 de octubre, cuyo Capítulo VIII relativo al régimen disciplinario ha sido derogado por la disposición derogatoria única del RD 796/2005, de 1 de julio, que aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia (BOE de 23 de julio de 2005, núm. 175, pp. 26349 y ss.).

vii)»⁽⁹⁸⁾. Precisamente el art. 479.4 LOPJ dispone la creación de Institutos de Medicina Legal de ámbito autonómico e incluso de ámbito provincial, dada la posibilidad de su establecimiento en ulteriores ciudades más allá de aquella donde resida la sede de los Tribunales Superiores de Justicia o la capitalidad administrativa de la concreta Comunidad Autónoma⁽⁹⁹⁾.

En cuanto a las concretas funciones de tal Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la administración de Justicia⁽¹⁰⁰⁾ pueden mencionarse las siguientes: a) Asistencia técnica a Juzgados, Tribunales, Fiscalías y Oficinas de Registro Civil, la cual puede ser a su vez de dos tipos, bien de carácter forense y tanatológico (¿?), bien de carácter médico en vigilancia de detenidos⁽¹⁰¹⁾, lesionados o enfermos que se encuentren bajo la jurisdicción de los anteriores Juzgados y Tribunales; b) Emisión de informes y dictámenes médicos legales en el curso procesal realizando el control periódico de los lesionados así como la correspondiente valoración de daños corporales⁽¹⁰²⁾; c) Funciones de investigación y colaboración que deriven de sus propias actuaciones y cuya inclusión constituye si acaso la principal novedad traducible en el reconocimiento legal ahora existente respecto de estas tareas de ordinario acometidas a solicitud de otros cuerpos⁽¹⁰³⁾.

98. Art. 479.3 LOPJ. Tal es el caso por ejemplo de su intervención en materia de nacimientos y defunciones o la asistencia a los menores afectados durante la correspondiente tramitación procesal en sede de los Juzgados de Menores; así, MORENO CATENA, V. y CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: *Introducción al Derecho Procesal*, 2.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 183.

99. Así también art. 2 Reglamento de los Institutos de Medicina Legal, aprobado por RD 386/1996, de 1 de marzo.

100. En la línea indicada por el art. 479.2 LOPJ. Dentro de este cuerpo se han integrado también los antiguos médicos del Registro Civil, así como la también extinta escala de médicos de la Obra de Protección de Menores en virtud de lo dispuesto en la LO 7/1992, de 20 de noviembre y en el RD 181/1993, de 9 de febrero. Así, MORENO CATENA, *Introducción al Derecho Procesal*, ob. cit., p. 183.

101. A fin de evitar la práctica aberrante de la tortura. Véase GIMENO SENDRA: *Introducción al Derecho Procesal*, ob. cit., p. 206. Esta función ya era contemplada de forma expresa en el anterior art. 498.2 LOPJ.

102. Así también art. 3 RD 296/12996 respecto de esta y la anterior función.

103. Por ejemplo en los supuestos de exhumación de restos óseos para proceder a la investigación genérica a solicitud de la Policía Judicial. Además ha de reconocerse que la investigación constituye parte del quehacer diario de tales médicos forenses, y por ello se alaba el reconocimiento de tales tareas investigadoras a fin de no quedar como antes «*oscurementemente relegados a la obtención ardua del material de indagación con pena y sin gloria*» según hace constar LACABA SÁNCHEZ: «Valor procesal de la actuación del médico forense», ob. cit., p. 2. No obstante una referencia genérica a tales funciones de colaboración e investigación ya existía a tenor del art. 3.g) RD 296/1996.

Mar Jimeno Bulnes

Finalmente la ley procede en los arts. 475.b) y 480 LOPJ a la enumeración de los restantes cuerpos especiales ⁽¹⁰⁴⁾, todos ellos con destino en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia como es asimismo regulado en idéntico precepto y con sede en Madrid ⁽¹⁰⁵⁾. Tales cuerpos se encuentran igualmente sujetos al principio de jerarquía, en concreto del Director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses o, en su caso, del Director del Instituto de Medicina Legal en el que se encontraren destinados ⁽¹⁰⁶⁾, y son los siguientes:

- 1) Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, para el que se exige posesión del título en cualesquiera licenciaturas en ciencias experimentales de la salud según convocatoria y especialidad. Sus funciones versan sobre la asistencia técnica en materia de sus disciplinas a Juzgados, Tribunales, Fiscalías y Médicos Forenses, así como la realización de análisis, informes y dictámenes. Pueden prestar asimismo servicios en los Institutos de Medicina Legal conforme al art. 480.2 LOPJ.
- 2) Cuerpo de Técnicos Especialistas de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con exigencia de título de Técnico Superior en Formación Profesional o equivalente, en función de la profesión exigida en las bases de la correspondiente convocatoria y de conformidad con el contenido de los puestos de trabajo ofertados. La ley define a este cuerpo como «*cuerpo de auxilio especializado al servicio de la Administración de Justicia*» ⁽¹⁰⁷⁾ y le encomienda como tarea principal auxiliar técnicamente en las actividades científicas y de investigación propias del Instituto al que están adscritos. Así, también cabe que sean destinados en los Institutos de Medicina Legal según dispone el art. 480.3 LOPJ.
- 3) Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con exigencia de titulación como Técnico en Forma-

104. La nueva regulación no contempla en la actualidad la Escala de Agentes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología antes prevista en el art. 506.4 LOPJ con categoría de Agente Judicial y ahora declarada a extinguir conforme a la disposición transitoria 1.ª LO 19/2003, si bien hasta entonces se les adjudica «*funciones instrumentales y de apoyo*».

105. Véase Reglamento del Instituto de Toxicología aprobado por RD 862/1998, de 8 de mayo. No obstante la denominación recibida todos estos funcionarios pueden igualmente prestar servicios en los Institutos de Medicina Legal conforme al mismo art. 480 LOPJ.

106. Art. 480.5 LOPJ.

107. Art. 480.3 LOPJ.

ción Profesional o equivalente en la materia que se determina en la oportuna convocatoria y según el puesto de trabajo ofertado. Se adjudica a este cuerpo la realización de «*funciones de apoyo propias de su formación en las actividades científicas y de investigación*» de sendos Institutos de Toxicología o Medicina legal, en función de su adscripción.

2. RÉGIMEN GENERAL RELATIVO AL ESTATUTO JURÍDICO

Ulterior aportación de la LO 19/2003, de 23 de diciembre, ha consistido en la inclusión de un completo y exhaustivo régimen general por lo que respecta al estatuto jurídico común a los nuevos cuerpos de funcionarios de la administración de Justicia y el cual es ahora contenido en los arts.482-540 LOPJ. Dicha normativa legal, por lo que a estos cuerpos se refiere, es además complementada con otra de rango reglamentario⁽¹⁰⁸⁾ y así, en concreto, el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal al Servicio de la Administración de Justicia objeto de reciente publicación mediante RD 1451/2005 de 7 de diciembre⁽¹⁰⁹⁾ y el Reglamento de Régimen Disciplinario del Personal al Servicio de la Administración de Justicia aprobado también en el presente año en curso a partir del RD 796/2005 de 1 de julio⁽¹¹⁰⁾.

Haciendo un breve análisis de los aspectos más relevantes de régimen legal relativo al estatuto jurídico del común de los cuerpos de funcionarios al servicio de la administración de Justicia pueden destacarse diversas modificaciones. Conviene si acaso adelantar que tales novedades relativas al conjunto del estatuto jurídico inciden de forma importante en el propio carácter «nacional» de dichos cuerpos de funcionarios generales y especiales, en tanto en cuanto va teniendo lugar por parte de las Comunidades Autónomas la asunción de las competencias indicadas en el art. 471.1 LOPJ —esto es, selección formación inicial y continuada, provisión de destinos, ascensos, situaciones

108. A dictar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la LO 19/2003 (si bien como ha sido dicho no se anuncia dicha entrada en vigor) a tenor de la disposición final 1.^a

109. BOE de 27 de diciembre de 2005, núm. 309, pp. 4252 y ss. Puede consultarse asimismo dicho Reglamento, al igual que el informe aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el pasado 22 de junio de 2005, en la página web del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia: <www.staj.es>, apartado Estatuto Jurídico. La misma página dispone de un resumen dirigido a los funcionarios de Justicia respecto a los aspectos más relevantes relativos a su estatuto jurídico, que ahora constituyen el objeto de este breve examen.

110. BOE de 23 de julio de 2005, núm. 175, pp. 26349 y ss.

Mar Jimeno Bulnes

administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y régimen disciplinario— conforme al proceso de transferencia de competencias en materia de Justicia a las distintas Comunidades Autónomas⁽¹¹¹⁾. De este modo, entre las novedades relativas a la vigente regulación del estatuto jurídico de tales cuerpos de funcionarios cabe citar las siguientes:

- 1) En materia de oferta de empleo público está prevista una única oferta anual⁽¹¹²⁾ en la que tendrá lugar la participación de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia a fin de determinar las necesidades de personal requeridas en relación con los distintos cuerpos de funcionarios al servicio de la administración de Justicia a aprobar por el gobierno y con reserva de un 5% de las vacantes para ser cubiertas por personas afectadas de discapacidad (igual o superior a 33%)⁽¹¹³⁾. De este modo se asume la doctrina constitucional sentada en las SSTC 56/1990, de 29 de marzo y 105/2000, de 13 de abril, en interpretación del inciso «*en su caso*» contenido en el actual art. 471.1 LOPJ y así la defensa de la atribución de competencias a las Comunidades Autónomas en materias relativas al estatuto jurídico del personal al servicio de la administración de Justicia⁽¹¹⁴⁾, por cuanto tales materias y en definitiva el personal al que afectan constituyen la llamada «*administración de la Administración de Justicia*» ajena al núcleo esencial de la Administración de Justi-

111. Cfr. art. 149.1.5.ª CE e interpretación constitucional de dicho precepto realizada especialmente en SSTC 56/1990, de 29 de marzo, y 105/2000, de 13 de abril. Entre las Comunidades Autónomas pendientes de gestionar las transferencias en esta materia se encuentran Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De forma específica una referencia a las cuestiones planteadas respecto del personal al servicio de la administración de Justicia en relación con dicho traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas véase BENDALA GARCÍA, R.: «El funcionamiento de las oficinas judiciales», Jornadas de estudio: *La oficina judicial: hacia un nuevo modelo*, ob. cit., pp. 65 y ss.

112. De esta forma y a modo de ejemplo, acaba de anunciarse el concurso de traslado de plazas vacantes así como de nueva creación entre funcionarios de los cuerpos generales convocadas por el Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia (País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Valencia, Canarias, Navarra y Madrid); v. BOE de 12 de noviembre de 2005, núm. 271, pp. 37069 y ss., así como los correspondientes boletines oficiales de tales Comunidades Autónomas.

113. Arts. 482 LOPJ y 1-5 del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la administración de Justicia.

114. Para un reparto de las competencias entre Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas en relación con el estatuto jurídico de este personal al servicio de la administración de Justicia consúltese CASTILLO MANZANARES, R.: *Manual de organización judicial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 112 y ss.

cia ⁽¹¹⁵⁾. La misma política fue sugerida por el Consejo General del Poder Judicial en su *Libro blanco de la Justicia*, proponiendo el mantenimiento por su parte de la competencia sobre Jueces, Magistrados y Secretarios Judiciales, mientras que la titularidad de la competencia sobre el personal al servicio de la administración de Justicia correspondería a las Comunidades Autónomas ⁽¹¹⁶⁾.

- 2) En cuanto al ingreso en los diferentes cuerpos se contempla un sistema de acceso general y común para todos los cuerpos con pruebas selectivas y temarios únicos en todo el territorio del Estado, a salvo de las pruebas que puedan establecerse para la acreditación del conocimiento de la lengua y Derecho foral en su caso, pruebas que serán de carácter optativo y no eliminatorio ⁽¹¹⁷⁾. El sistema de acceso es doble, por oposición (sistema ordinario) y por concurso-oposición (sistema excepcional) ⁽¹¹⁸⁾, pudiéndose incluir en ambos casos dentro del proceso selectivo la realización de un curso teórico-práctico o de un período de prácticas a realizar en los propios centros o institutos de formación dependientes de las Comunidades Autónomas o en las mismas oficinas judiciales del ámbito autonómico, período durante el cual los aspirantes tendrán la consideración de funcionarios en prácticas ⁽¹¹⁹⁾. A tal

115. STC 56/1990, FJ 6-3. Sobre esta materia y sentencia en particular puede consultarse GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N.: «La oficina judicial», *Jornadas de estudio «la oficina judicial: hacia un nuevo modelo»*, ob. cit., pp. 27 y ss., esp. pp. 35 y ss.; JIMÉNEZ ASENSIO, R.: *Dos estudios sobre Administración de Justicia y Comunidades Autónomas*, Civitas, Madrid, 1998, pp. 43 y ss., así como LÓPEZ AGUILAR, J.F.: *Justicia y Estado autonómico*, Civitas, Madrid, 1995, pp. 142 y ss. y, fundamentalmente, REVERÓN PALENZUELA, B.: *Poder Judicial, unidad jurisdiccional y estado autonómico*, Comares, Granada, 1996, pp. 132 y ss., con amplio comentario a la sentencia citada.

116. V. p. 139.

117. Arts. 483.2 LOPJ y 8 del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la administración de Justicia. Desde el CGPJ se sugiere el establecimiento de unos criterios básicos para evaluar dicha prueba optativa a fin de que no se realice una evaluación diferente en cada convocatoria (v. p. 6).

118. Art. 484 LOPJ. Una crítica a este sistema tradicional de acceso a la función pública en el ámbito judicial mediante tales «oposiciones totalmente memorísticas» se realiza por BALERDI, BENDALA y CARMENA: *Claves para una gestión de la nueva oficina judicial*, ob. cit., esp. p. 42; en su lugar proponen el modelo del Reino Unido, y así la realización de entrevistas y test de personalidad.

119. Arts. 485 LOPJ y 24-25 del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la administración de Justicia, determinando el último de ellos los deberes y derechos de tales funcionarios en prácticas; por ejemplo, se contempla el derecho a percibir una retribución equivalente al sueldo y las pagas extraordinarias correspondientes al cuerpo al que accedan. La realización de este período de prácticas a modo de formación inicial en el cuerpo ya fue sugerido en el *Libro blanco de la Justicia* (v. p. 137).

fin se procede igualmente a crear una Comisión de Selección de Personal con competencia —entre otras— para elaborar las bases de cada convocatoria y temarios respectivos —únicos para todo el Estado—, además del contenido del programa del período de prácticas ⁽¹²⁰⁾, y se mantiene el establecimiento de Tribunales Calificadores Único y Delegados, que actuarán en el respectivo ámbito territorial por delegación del primero ⁽¹²¹⁾.

- 3) Se mantiene la posibilidad de promoción interna con reserva de un 50% de las plazas vacantes incluidas para cada cuerpo en la oferta de empleo público y así la posibilidad de ascenso al cuerpo superior en el caso de los Cuerpos Generales, siempre que se posea la titulación requerida, o a las especialidades de un mismo cuerpo si se trata de los Cuerpos Especiales ⁽¹²²⁾. Se impone legalmente la exigencia de acreditar una antigüedad de dos años en el cuerpo al que pertenezcan —además de la titulación, lógicamente ⁽¹²³⁾— y el sistema de acceso tiene lugar mediante concurso-oposición en dos fases; una primera consistente en la superación de la oposición con temario más reducido al exigido para el acceso libre y que tendrá carácter eliminatorio, y una segunda de concurso consistente en la valoración de los méritos reglamentariamente establecidos conforme a la puntuación realizada para cada uno de ellos por parte de la Comisión de Selección y aprobada por el Ministerio de Justicia ⁽¹²⁴⁾.

120. Arts. 486 LOPJ y 9-10 del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la administración de Justicia. Su nombramiento tiene lugar por el Ministro de Justicia y su composición incluye esencialmente cuatro vocales representantes del Ministerio de Justicia, entre los cuales se encuentra el Presidente con voto de calidad, y otros cuatro vocales representantes de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Justicia.

121. Arts. 487 LOPJ y 12-15 del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la administración de Justicia, en consonancia con lo dispuesto en el anterior RD 249/1996. A tal fin se determina la composición de los Tribunales Calificadores Únicos y Delegados por un número impar de vocales, no inferior a cinco, en el primer caso incluyendo funcionarios del Ministerio de Justicia y en el segundo funcionarios de las Comunidades Autónomas. No se contempla la publicidad del nombramiento de tales Tribunales Calificadores ni el momento de proceder a la abstención por parte de sus miembros, sugerencias ambas que recoge el CGPJ en su informe (v. p. 7).

122. Arts. 490.1 y 2 LOPJ y 31 del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la administración de Justicia.

123. Arts. 490.5 LOPJ y 33 del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la administración de Justicia.

124. Arts. 490.3 LOPJ y 32 y 37 del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la administración de Justicia. Entre los méritos a puntuar han de incluirse en todo caso: historial académico en relación con las materias propias del cuerpo; historial profesional en

- 4) También se contemplan, al igual que en las disposiciones reglamentarias de 1996 ⁽¹²⁵⁾, las condiciones para la adquisición y pérdida de la condición de funcionario —entre ellas la jubilación voluntaria, forzosa y por incapacidad permanente para el servicio ⁽¹²⁶⁾—, si bien se incluye ahora una regulación mucho más precisa respecto del procedimiento de rehabilitación bajo la competencia del Ministerio de Justicia ⁽¹²⁷⁾ y con inclusión de las distintas fases de iniciación del expediente, tramitación, terminación y criterios para formular la propuesta de resolución ⁽¹²⁸⁾. De esta forma se contemplan tres supuestos de rehabilitación por pérdida de la condición de funcionario, cuales son: a) la desaparición de la causa que motivó incapacidad permanente; b) la recuperación de la nacionalidad española u otra que permita la rehabilitación, y c) la extinción de responsabilidad civil y penal derivada del cumplimiento de pena de inhabilitación o condena por delito doloso a pena privativa de libertad superior a tres años, así como de la imposición de sanción disciplinaria ⁽¹²⁹⁾.
- 5) El capítulo de derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios de los nuevos cuerpos se regula ampliamente en la nueva legislación orgánica por oposición a la anterior que solamente contemplaba el derecho a la sindicación y a la huelga (ex art. 470 LOPJ) ⁽¹³⁰⁾. Por el contrario aho-

relación con los méritos relativos al puesto de trabajo con valoración de diplomas, conocimientos informáticos y cursos sobre la materia o especialidad del cuerpo; antigüedad; conocimiento de idiomas extranjeros y de idiomas oficiales autonómicos y Derecho foral propio en las Comunidades Autónomas que dispongan de ellos.

125. RR.DD. 249/1996 para los Oficiales, Auxiliares y Agentes judiciales y 296/1996 para los médicos forenses ya citados.

126. Art. 492.1 LOPJ. Se mantiene la edad de jubilación forzosa en 65 años ofrecida por el anterior Art. 467 LOPJ y se añade ahora la posibilidad para los funcionarios de los nuevos cuerpos de «*prolongar voluntariamente su permanencia en el servicio activo, como máximo hasta que cumplan 70 años*», en régimen de igualdad con otros funcionarios.

127. Art. 77 del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la administración de Justicia, correspondiendo la instrucción del expediente a la Secretaría de Estado de Justicia a través del titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y la resolución al Ministro de Justicia.

128. Arts. 78-81 del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la administración de Justicia, estableciendo el procedimiento para llevar a cabo dicha rehabilitación.

129. Arts. 493 LOPJ y 76 del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la administración de Justicia.

130. Por supuesto tales derechos (aun cuando en mucha menor medida), deberes e incompatibilidades eran contemplados reglamentariamente, y así arts. 61-81 RD 249/1996 para Oficiales, Auxiliares y Agentes y 32-51 RD 296/1996 para los Médicos Forenses.

Mar Jimeno Bulnes

ra se contempla una clasificación de derechos entre aquellos de carácter profesional y colectivo ⁽¹³¹⁾, así como un conjunto de deberes ⁽¹³²⁾ y un estricto régimen de incompatibilidades en igualdad de condiciones a los funcionarios de cualesquiera Administraciones Públicas ⁽¹³³⁾. Junto a ellos y en idéntico título se procede a establecer la regulación de la jornada laboral y régimen horario ⁽¹³⁴⁾, cuya fijación se determinará a través del calendario laboral que anualmente aprueben el Ministerio de Justicia y/o Comunidades Autónomas competentes en la materia con posibilidad del establecimiento de «flexibilidad horaria a la entrada y salida del trabajo» y con establecimiento asimismo de los servicios de guardia ⁽¹³⁵⁾; asimismo

131. Arts. 495 y 496 LOPJ respectivamente. Los primeros son de novedosa inclusión y así, por ejemplo, derecho a mantener su condición de funcionario y al desempeño de las tareas propias de su cuerpo sin remoción salvo causa legal; derecho a la percepción de retribución e indemnizaciones correspondientes; derecho a la carrera y promoción profesional; derecho a la formación inicial y continua; derecho a la información por sus superiores sobre las tareas a desempeñar; derecho al respeto de su intimidad y dignidad; derecho a vacaciones, permisos y licencias; derecho a la protección en materia de prevención de riesgos laborales; derecho a la jubilación y seguridad social integrado por el Régimen de Clases Pasivas del Estado (derechos pasivos) y la Mutualidad Judicial (MUGEJU). Entre los segundos se incluye el derecho a la libre asociación profesional, a la libre sindicación, a la actividad sindical, a la huelga, a la negociación colectiva y de reunión.

132. Según la redacción textual empleada en el art. 497 LOPJ se recoge todo un catálogo de «conductas»: respeto de la Constitución y ordenamiento jurídico, imparcialidad y lealtad en el ejercicio de sus tareas, diligencia en el cumplimiento de instrucciones de los superiores jerárquicos, aplicación en la realización de funciones, cumplimiento del régimen horario, deber de «sigilo» (secreto profesional), dación de cuenta sobre posibles ilegalidades, cumplimiento del régimen de incompatibilidades, tratamiento respetuoso al público en general, identificación ante los interesados, correcto empleo de locales, dependencias, material y documentos a su cargo y correcto tratamiento a superiores, compañeros y subordinados. Por el contrario desaparecen otros deberes hasta ahora contemplados, al menos para los anteriores Oficiales, Auxiliares y Agentes judiciales, cual era el deber de residencia contenido en el art. 78 RD 249/1996.

133. V. arts. 497-499 LOPJ, contemplando el último de tales preceptos el procedimiento de abstención y/o recusación. Por su parte, el art. 498.3 LOPJ señala, por ejemplo, entre las incompatibilidades de los Cuerpos Generales el ejercicio de la abogacía o procuraduría, la condición de agentes de seguros, el desempeño de cargo como gerente o consejero y servicios de gestión administrativa o la actuación pericial de carácter privado ante Juzgados y Tribunales; el ejercicio de cualesquiera otras actividades exigirá autorización previa del Ministerio de Justicia o Comunidad Autónoma en su caso; todas ellas ya fueron en mayor o menor medida contenidas en el art. 79 RD 249/1996.

134. Ha de tenerse en cuenta igualmente la modificación operada en la redacción del art. 182.1 LOPJ a raíz de la LO 19/2003 y así la actual consideración de los sábados como días inhábiles a efectos procesales, así como los días 24 y 31 de diciembre junto con «los domingos, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad» antes enunciados.

135. Arts. 500 y 501 LOPJ. Así por ejemplo, el último calendario laboral aprobado para el personal de la administración de Justicia tiene lugar mediante Resolución de 14 de septiembre de 2005 de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, BOE de 28 de septiembre de 2005, núm. 232, pp. 32061 y ss. Dicho calendario establece una jornada de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo que tendrá lugar sólo de mañana; asimismo se establece una distinción entre la llamada parte principal del horario (tiempo

se establece el régimen de vacaciones, permisos y licencias de forma similar al régimen reglamentario hasta ahora existente⁽¹³⁶⁾. Con ello se pretende dotar de criterios unitarios por lo que respecta al cumplimiento de la jornada laboral y régimen horario en las nuevas oficinas judiciales que luego habrá de ser objeto del control respectivo⁽¹³⁷⁾.

- 6) Tras la regulación de las situaciones administrativas de los nuevos funcionarios de modo similar al antes contemplado⁽¹³⁸⁾, y en sintonía con el régimen general de los funcionarios civiles de las Administración Pública estatal⁽¹³⁹⁾, se añade un nuevo título relativo al régimen retributivo. Se establece así la distinción entre retribuciones denominadas básicas y complementarias, dividiéndose además estas últimas entre fijas y variables⁽¹⁴⁰⁾ y para la determinación de cuyas cuantías se concede en algunos casos participación a los representantes⁽¹⁴¹⁾. De este modo se fija un detallado

fijo o estable) de 30 horas semanales con un promedio de 6 horas diarias a realizar de lunes a viernes entre las 8,30 y las 15 h y la parte variable o jornada flexible a cumplir entre las 7,30-9 h y 15-18 h (17 h los viernes) y/o sábados entre 9 y 14 h.

136. Arts. 502-505 LOPJ contemplando igualmente régimen mensual de vacaciones si bien ahora se añade también la equivalencia de 22 días hábiles, licencias por matrimonio, maternidad, enfermedad o estudios, permisos de maternidad o por asuntos particulares (9 días), etc.

137. La práctica judicial mostraba y aún muestra a menudo las diferencias existentes a este respecto en los diferentes órganos jurisdiccionales en función del control ejercido en cada caso; así, desde una actitud rigurosa hasta una excesiva tolerancia manifestada en cada caso por los superiores jerárquicos. A fin de proceder a una unificación en el propio sistema de control de tales cumplimientos y en suma de la realización del trabajo diario por parte de los nuevos funcionarios se propone la atribución del control a las próximas Unidades Administrativas de Gestión y Administración de Personal; véase así *Propuesta sobre nuevo diseño de la oficina judicial*, p. 7.

138. Arts. 506-514 LOPJ contemplando las situaciones de servicio activo, servicios especiales, excedencia voluntaria (por cuidado de familiares, prestación de servicios en el sector público y agrupación familiar) y suspensión de funciones. Cfr. arts. 30 y ss. RD 249/1996 y 52 y ss. RD 296/1996.

139. V. RD 365/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

140. Arts. 516-519 LOPJ. Véase a modo de ejemplo el cuadro general de retribuciones establecido respecto de los cuerpos generales para 2005 antes comentado aun cuando la fijación de complementos todavía no se corresponde con la escala actual, aún pendiente de desarrollo, así como el RD 1714/2004, de 23 de julio, por el que se fija para el año 2004 el régimen retributivo de los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial y de los Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

141. Así en concreto respecto del complemento específico y complemento de productividad a fijar por el Ministerio de Justicia u órgano competente de la Comunidad Autónoma en aquellas en que se ha operado la oportuna transferencia (arts. 519.3 y 4 LOPJ). En cambio la determinación de la cuantía del complemento general de puesto se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado conforme establece el art. 519.2 LOPJ y la de las gratificaciones junto con la fijación de los oportunos criterios corresponderá exclusivamente al Ministerio de Justicia u órgano competente de la Comunidad Autónoma según dispone el art. 519.5 LOPJ.

Mar Jimeno Bulnes

—y a veces complejo— sistema de retribuciones en atención a tales conceptos que diferencia entre, por una parte, un tipo de retribución (básica), cuya cuantía «*es igual para cada uno de los cuerpos, con independencia del lugar de prestación de los servicios o del puesto que se desempeñe*», y así comprenderá el denominado sueldo base, trienios y las dos pagas extraordinarias ⁽¹⁴²⁾ y, por otra, aquellas retribuciones complementarias, tanto fijas en su cuantía y carácter periódico (complemento general de puesto y complemento específico ⁽¹⁴³⁾) como variables (complemento de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios ⁽¹⁴⁴⁾). Con ello se procura una mejora retributiva así como un más adecuado reparto de conceptos objeto de ésta, incentivando el esfuerzo profesional y personal de estos funcionarios como ya venía siendo demandado desde hace tiempo por parte de diversos sectores, incluido el propio Consejo General del Poder Judicial en su *Libro blanco de la Justicia* ⁽¹⁴⁵⁾.

142. Art. 519 LOPJ, computándose cada trienio con un 5% del sueldo base.

143. Conforme al art. 516.b) 1.º LOPJ se incluyen conceptos como dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, penosidad o peligrosidad. Por lo que respecta al complemento general de puesto éste retribuirá los distintos tipos de puestos que se establezcan y que están pendientes de aprobación definitiva en virtud del Proyecto de Real Decreto por el que se determinan los puestos tipo de las unidades que integran las oficinas judiciales y otros servicios no jurisdiccionales y sus correspondientes valoraciones a efectos del complemento general del puesto de los funcionarios de la administración de Justicia (<www.funcionariosjusticia.com>), que distingue cuatro tipos de puestos en función del lugar de ubicación de las unidades y así: tipo I (Madrid y Barcelona capital y provincia), tipo II (Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Sta. Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Zaragoza además de sus respectivas provincias, excepción hecha de Palma de Mallorca salvo omisión involuntaria), tipo III (localidades distintas de las anteriores) y tipo IV (Juzgados de Paz).

144. En atención al art. 516.B) 2.º LOPJ el complemento de productividad se destina a retribuir, entre otros conceptos más abstractos, «*el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo*», mientras que las gratificaciones por servicios extraordinarios atienden a la retribución de «*los servicios prestados con carácter extraordinario fuera de la jornada normal de trabajo*». Tal es el caso de las guardias.

145. Se manifiestan las discriminaciones retributivas existentes entre los funcionarios en atención al órgano jurisdiccional en el que prestara servicios así como la presencia de fenómenos tales como la, por otra parte, lógica «huida» de los funcionarios a aquellos mejor retribuidos y en concreto, los Juzgados de Instrucción (v. p. 138). Así también, entre la bibliografía, MARTÍN CONTRERAS: «La reforma de la oficina judicial», ob. cit., p. 719, poniendo de relieve la desigualdad retributiva hasta ahora existente que provocaba la diáspora de los funcionarios hacia los órganos jurisdiccionales mejor retribuidos (Juzgados de Instrucción, entre otros), además de que tales retribuciones no tenían además una relación proporcional con el trabajo realizado, dándose así casos de funcionarios «*que trabajen menos y ganen más*», y PEDRAZ PENALVA: «Notas sobre la oficina judicial y su reforma», ob. cit., p. 869, advirtiendo igualmente la inadecuación del entonces sistema retributivo con las tareas efectivamente realizadas por los funcionarios de Justicia, así como la dificultad de determinar ciertos complementos como el de destino según fue más arriba expuesto. Por último y de forma evidente, tal fue una reclamación también hecha desde el sector sindical; véase TRIGUERO DORADO, J.: «Las oficinas judiciales vistas desde dentro», *Jornadas de estudio: «la oficina judicial: hacia un nuevo modelo*», ob. cit., pp. 77 y ss., esp. p. 85.

- 7) En cuanto a la nueva regulación ofrecida en relación con la provisión de puestos y régimen de movilidad se observa un esfuerzo por proceder a la ordenación del personal al servicio de la administración de Justicia conforme las relaciones de puestos de trabajo formuladas por el Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas en su ámbito ⁽¹⁴⁶⁾, en un intento asimismo de reducir la excesiva movilidad que hasta ahora acusaban estos funcionarios y ya en varias ocasiones puesta de relieve desde múltiples instancias ⁽¹⁴⁷⁾. Por lo que respecta a la provisión de puestos se establece el doble sistema del concurso (sistema ordinario) y libre designación (sistema excepcional). Así, si bien las normas relativas al sistema de concurso resultan más claras al establecer la modalidad del concurso de traslado para cubrir los puestos de trabajo genérico y la modalidad de concurso específico para aquellos singularizados ⁽¹⁴⁸⁾, en cambio no se comprende ni en el texto de la legislación orgánica ni en el de las correspondientes disposiciones reglamentarias aún en fase de tramitación qué tipo de puestos y en qué condiciones podría tener lugar la aplicación de este sistema excepcional de libre designación, por cuanto la única referencia contenida a este tenor es la provisión de «*puestos directivos*» (¿?) y aquellos de «*especial responsabilidad y dedicación*» ⁽¹⁴⁹⁾. Así también y por lo que respecta a la movilidad, dentro de otras formas de provisión legalmente contempladas (redistribución y reordenación de efectivos, rea-

146. Arts. 524-533 LOPJ y 39-75 del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal al servicio de la administración de Justicia.

147. Desde el CGPJ en su *Libro blanco de la Justicia*, considerando que «*la movilidad de los funcionarios debe ser evitada*» (máxima que parece en exceso rígida y así también perjudicial de los posibles beneficios de una cierta movilidad) para lo cual tiene precisamente lugar el establecimiento de las pruebas de ingreso y la cobertura de vacantes y concursos de traslado desde el nivel territorial de las Comunidades Autónomas. Así también, PEDRAZ PENALVA: «Notas sobre la oficina judicial y su reforma», ob. cit., p. 868, aduciendo cómo a menudo los funcionarios con mayor experiencia se trasladan a los puestos de menor dificultad o trabajo debido.

148. De ordinario se considerarán puestos genéricos los correspondientes a las unidades procesales de apoyo directo (UPAD) a órganos jurisdiccionales que impliquen funciones propias del cuerpo y no posean un contenido funcional individualizado y puestos singularizados aquellos que impliquen funciones asignadas de forma especial e individualizada.

149. Arts. 526.2 LOPJ y 56.1 del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la administración de Justicia. Por esta razón se sugiere desde el CGPJ, en línea ya con el informe presentado respecto al anteproyecto LO 19/2003, una mayor precisión con un criterio restrictivo respecto de cuáles pudieran ser estos puestos susceptibles de proveerse por el sistema de libre designación, además de cuestionarse cuáles serían tales «*puestos directivos*» por entenderse que ninguna de las funciones atribuidas a los cuerpos ahora objeto de estudio reúne tal carácter (v. «Informe CGPJ al Proyecto de Reglamento», p. 10).

signación forzosa y adscripción provisional)⁽¹⁵⁰⁾, la norma reglamentaria incluye una especialidad de novedosa creación cual es el traslado por causa de violencia sobre la mujer funcionaria⁽¹⁵¹⁾ en consonancia con la regulación ahora ofrecida con carácter general por la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género⁽¹⁵²⁾.

- 8) Finalmente, la responsabilidad disciplinaria de los nuevos funcionarios al servicio de la administración de Justicia es ahora objeto de desarrollo reglamentario desde el reciente RD 796/2005, de 1 de julio, a partir de la correspondiente legislación orgánica⁽¹⁵³⁾. De esta forma se unifica, como ha tenido lugar en anteriores aspectos del estatuto jurídico, el régimen disciplinario aplicable a los nuevos cuerpos generales y especiales con derogación expresa de la normativa anterior⁽¹⁵⁴⁾. Se mantiene la tradicional división tripartita entre faltas muy graves, graves y leves, si bien se ofrece nueva regulación y tipología por lo que respecta especialmente a las dos primeras⁽¹⁵⁵⁾; también se mantiene el régimen de sanciones a ex-

150. Arts. 527-528 LOPJ y 63-75 Proyecto de Reglamento.

151. Art. 63 del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la administración de Justicia, disponiendo literalmente que *«la funcionaria víctima de violencia sobre la mujer que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su Cuerpo o Escala y de análogas características, que se encuentre vacante y cuya provisión sea necesaria»*. Se prevé una duración inicial de seis meses para dicho traslado, período durante el cual la funcionaria ocupará el nuevo puesto en régimen de comisión de servicios y transcurrido el cual habrá de optar con carácter definitivo entre el puesto de origen o el hasta ahora ocupado en comisión de servicios.

152. Art. 24 que, en relación con los derechos de las funcionarias públicas, textualmente dispone: *«la funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica»*.

153. Arts. 534-540 LOPJ.

154. Arts. 83 y ss. RD 249/1996 en relación con los Oficiales, Auxiliares y Agentes judiciales y arts. 75 y ss. RD 296/1996 relativo a los Médicos Forenses según se establece en la disposición derogatoria única RD 796/2005.

155. Por ejemplo entre las faltas muy graves se añade el incumplimiento de resoluciones jurisdiccionales, desobediencia grave a un superior, utilización de la condición de funcionario para la obtención de beneficios, la realización de actividades declaradas legalmente incompatibles, inobservancia del deber de abstención, acoso sexual, agresión grave, arbitrariedad en uso de autoridad... y entre las graves, además de algunas de las anteriores cuando no merezcan la consideración de falta muy grave, el empleo inadecuado de los medios materiales (por ejemplo, informáticos), la elusión del control horario, la obstaculización de las labores de inspección... V. enumeración contenida en el art. 536 LOPJ.

cepción de la multa ⁽¹⁵⁶⁾. Asimismo se conserva la necesidad de incoar expediente disciplinario a los efectos de sancionar las faltas graves y muy graves, no así las faltas leves para las que basta el trámite de audiencia al interesado ⁽¹⁵⁷⁾; respecto a él, objeto de desarrollo en la pertinente norma reglamentaria, se observa como novedad más relevante la unificación de los órganos competentes —en suma, Ministerio de Justicia y/u órgano competente de la Comunidad Autónoma en su ámbito— para incoar, tramitar e imponer tales sanciones disciplinarias con independencia de su tipo ⁽¹⁵⁸⁾ y a salvo de la posible intervención del Ministerio Fiscal para el caso de que se apreciara concurrencia de responsabilidad penal ⁽¹⁵⁹⁾.

IV. PROBLEMÁTICA Y PROYECTOS DE FUTURO

Reservamos este apartado para una breve exposición —quizás a modo de conclusiones finales— del presente trabajo de aquellas cuestiones o situaciones pendientes de resolver en el futuro y que se considera puedan dar lugar a la presencia de los mayores problemas y/o disfunciones en el desempeño de su actividad profesional por parte de los funcionarios de los nuevos cuerpos hasta ahora analizados. Ciertamente muchas de ellas han ido poniéndose de relieve, especialmente a partir del anterior análisis de los aspectos relativos al estatuto jurídico de dicho personal al servicio de la administración de Justicia; tal es el caso, por ejemplo, de la referencia hecha al sistema de provisión de puestos y movilidad o régimen retributivo y, en menor medida, ingreso a partir de la competencia ahora compartida entre Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas o bien régimen horario.

156. Conforme el art. 538 LOPJ, apercibimiento, suspensión de empleo y sueldo, traslado forzoso fuera del municipio de destino y separación del servicio. En efecto, los RR.DD. 249/1996 y 296/1996 preveían la imposición de multa de hasta 30.000 pts. para los Oficiales, Auxiliares y Agentes (art. 88) y hasta 300.000 pts. para el caso de los Médicos Forenses (art. 80.1), salvo que se tratara de falta leve.

157. Art. 534.3 LOPJ.

158. Arts. 539 LOPJ y 20 RD 796/2005. En cambio, a tenor de los anteriores arts. 92 RD 249/1996 y 82 RD 296/1996, se preveía la competencia de diversas instituciones en función del tipo de sanción a imponer y así, del Presidente, fiscal, juez o Jefe respectivo, Sala de Gobierno correspondiente o Fiscal General del Estado, Ministerio de Justicia o Consejo de Ministros.

159. Arts. 534.4 y 5 LOPJ. La apertura de causa penal daría lugar a la lógica suspensión del expediente disciplinario hasta el dictado de sentencia firme o auto de sobreseimiento, pero como indica la ley la responsabilidad penal no suprime la anterior disciplinaria.

Mar Jimeno Bulnes

Por ello simplemente ahora se hará referencia brevemente a otros aspectos hasta ahora quizás no manifestados por nuestra parte y que, a la luz de la experiencia práctica diaria existente en Juzgados y Tribunales —ahora oficinas judiciales— vertida por los protagonistas de este estudio⁽¹⁶⁰⁾, constituyen los que podríamos llamar «puntos negros» en la materia abordada. Es, por tanto, deseable el acometimiento de reformas en este sentido, muchas de las cuales ya están en fase de desarrollo con motivo de la implantación del nuevo modelo de oficina judicial al menos en su experiencia piloto⁽¹⁶¹⁾, dado el período transitorio en el que nos hallamos. Así, y sin perjuicio de la advertencia de otras cuestiones y/o situaciones que cabría considerar igualmente problemáticas, aquí y ahora se reseñan brevemente las siguientes:

- A) *Medios personales*: es clásica ya la referencia en materia de administración de Justicia a la escasez de medios personales, y a la necesidad que siempre se plantea de abordar las reformas orgánicas de modo previo a las procesales y no viceversa como en ocasiones acaece⁽¹⁶²⁾. Por lo que respecta al incremento concreto del llamado «personal auxiliar», desde diversas instancias se viene reclamando desde hace años su incremento de forma permanente y no meramente temporal como en ocasiones es costumbre⁽¹⁶³⁾ pues, si bien ciertas necesidades hasta ahora acometidas por tales fun-

160. Nos hemos permitido recabar en este caso sus propias opiniones respecto de las dificultades y perturbaciones que encuentran en la práctica diaria de su trabajo así como introducir nuestras propias valoraciones a este respecto.

161. Véase el documento elaborado por el Ministerio de Justicia relativo al «Despliegue de la nueva oficina judicial en las once ciudades seleccionadas por el Ministerio de Justicia para la primera fase del plan de implantación», accesible en la página web <www.justicia.es>, sección de Actualidad. Así, las elegidas para este plan piloto resultan ser Avilés, Burgos, Cáceres, Ceuta, Ciudad Real, Logroño, Melilla, Murcia, Palma de Mallorca, Santander y Zaragoza.

162. Así tuvo lugar en concreto con la promulgación de la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, además con la instauración con carácter general de principios procesales como la oralidad, amén del propósito de abreviación de plazos procesales. Entonces se puso ya de relieve la necesidad de acometer reformas de carácter orgánico consistentes —entre otras— en el aumento de órganos jurisdiccionales y mayor dotación de medios personales y materiales a la administración de Justicia; por todos, PICÓ I JUNOY, J.: «Reflexiones en torno a la reforma del proceso civil», *Revista Jurídica de Cataluña*, núm. 4, 1998, pp. 137 y ss., esp. p. 142. Así también, de modo previo y con carácter general, MORENO CATENA, V., «Crisis de la Justicia y reformas orgánicas», *Crisis de la Justicia y Reformas Procesales (I Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León)*, Ministerio de Justicia, pp. 81 y ss.

163. Véanse por ejemplo sendas Memorias de la Fiscalía General del Estado correspondientes a los años 2003 y 2004, pp. 19 y 28 respectivamente.

cionarios han disminuido derivadas de la creciente informatización de la administración de Justicia, sin embargo han surgido otras, pues no en vano han aumentado las competencias y diversificación de Juzgados y Tribunales, así como incluso las necesidades sociales ⁽¹⁶⁴⁾. Pero además de esta mejor dotación de medios personales es necesario asimismo proceder a su organización, especialmente tras la implantación de nuevos servicios —como es el caso de las guardias— que reportan un notable aumento de trabajo y esfuerzo al tener lugar la consiguiente paralización y acumulación de asuntos, siendo obligada la realización de horas extras «voluntarias» (incluso los domingos) ⁽¹⁶⁵⁾. Por último sería igualmente deseable en este capítulo una mayor uniformidad entre las distintas Comunidades Autónomas por lo que respecta a la forma y condiciones de realización de las tareas atribuidas a dicho funcionariado ⁽¹⁶⁶⁾.

- B) *Medios materiales*: es evidente la ayuda que reporta la presencia de medios materiales adecuados a la cotidiana labor de los funcionarios auxiliares de la administración de Justicia. Dentro de este capítulo ha de citarse, por tanto, en primer lugar el fundamental papel que desempeña la infor-

164. Entre estas nuevas necesidades pueden citarse las derivadas de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, juicios rápidos, o con motivo de fenómenos como la violencia doméstica, extranjería, criminalidad organizada... que hacen necesario adaptar los recursos humanos a la nueva realidad social. Una necesidad relevante en este sentido ha sido la propia implantación del servicio de guardia en Juzgados de Instrucción (o de Primera Instancia e Instrucción) objeto de actual regulación en los arts. 38 y ss. del Reglamento 1/2005 de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales (BOE de 27 de septiembre de 2005, núm. 231, pp. 31859 y ss.).

165. Ya no sólo durante la semana de guardia en sí sino por la llamada «posguardia» que, por ejemplo, en un Juzgado de Instrucción de la ciudad de Valladolid puede reportar la realización de 800 diligencias mensuales. Ello lógicamente se produce en los Juzgados de Instrucción y particularmente en los mixtos de primera instancia e instrucción, llamados comúnmente «de trinchera». Todo este esfuerzo añadido provoca un evidente stress al personal al servicio de la administración de Justicia; véase en este sentido FUERTES MARTÍNEZ, F.: «Algunas hipótesis sobre el *mobbing* y la calidad laboral en la Administración de Justicia», <www.funcionariosjusticia.com>, sección de Foros, disponible a la fecha de noviembre de 2005. Ha de indicarse igualmente el acceso restringido de esta página web.

166. En Cataluña por ejemplo la tarea de registro se realiza en el propio Decanato y asimismo, en otro orden de cosas, el funcionario que enseña al «nuevo» percibe una retribución económica por ello. Precisamente una crítica en esta línea es la ausencia de la función de formación en Juzgados y Tribunales, lo cual, unido a la también ausencia de reconocimiento de dicha labor formativa entre los propios funcionarios, fomenta actitudes sumamente individualistas al contemplar la enseñanza al «nuevo» como un estorbo a la productividad. Así también FUERTES MARTÍNEZ, F.: «Algunas hipótesis sobre el *mobbing* y la calidad laboral en la Administración de Justicia», ob. cit., p. 4. Por ello la propuesta de crear un «protocolo de acogida» con destino al nuevo funcionario; en esta línea BALERDI, BENDALA y CARMENA: *Claves para la gestión de la nueva oficina judicial*, ob. cit., p. 48.

Mar Jimeno Bulnes

matización de la oficina judicial⁽¹⁶⁷⁾, proceso éste en estado de desarrollo y que en la práctica judicial alcanza diferentes niveles en función de las Comunidades Autónomas. Por ello la sugerencia de proceder a una política coordinada en la adquisición de equipos, sistemas y programas⁽¹⁶⁸⁾, así como la introducción de personal de apoyo en este sentido en la oficina judicial, todo ello en aras de evitar las disfunciones que en la actualidad tienen aún lugar en relación con este ámbito, en el que juega un papel clave también el acceso a internet por parte de estos funcionarios⁽¹⁶⁹⁾. Así también y en segundo lugar, en cuanto tales medios materiales, habrá de hacerse la necesaria adecuación de espacios (o «módulos») físicos dentro de la nueva estructura de edificios que conlleva la implantación del diseño de oficina judicial ahora acuñado en los que tenga lugar la ubicación de estos cuerpos de funcionarios, a fin de que puedan desarrollar de manera digna y racional su quehacer cotidiano en sustitución de la imagen —a menudo lamentable— que reportan los actuales Palacios de Justicia⁽¹⁷⁰⁾.

167. Puesto así de relieve en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, ob. cit., apdo. 14 en relación con las nuevas tecnologías, proponiéndose desde el Ministerio de Justicia la «estrecha colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas».

168. En esta línea, GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, ob. cit., p. 45, manifestando que «la oficina judicial no puede quedarse al margen del desarrollo de la llamada sociedad de la información»; así también MARTÍN CONTRERAS, «La reforma de la oficina judicial», ob. cit., p. 721. Entre la normativa existente en esta materia véase la Orden JUS/3425, de 26 de octubre, por la que se regula la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de Justicia (BOE de 4 de noviembre de 2005, núm. 264, pp. 36155 y ss.) y, de fecha anterior, la Instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia (BOE de 10 de marzo de 2003, núm. 59, pp. 9423 y ss.).

169. A modo de ejemplo en dicho capítulo de anomalías informáticas puede recordarse la existencia de programas diferentes en Juzgados y Audiencias/Tribunales superiores (Minerva), la inadecuación de los Libros Modelos a la legalidad vigente (todavía incluyen propuestas de providencias y autos), la dependencia de la asistencia técnica desde Madrid, la «caída de línea» durante el servicio de guardia, la pérdida de expedientes, la posesión de las claves necesarias para el acceso informático sólo por parte de un reducido número de funcionarios —lo que motiva la dependencia de éstos ante su necesidad—, la inaccesibilidad a internet o servicio de correo electrónico... y un largo etcétera. Precisamente sobre el acceso a internet véase DORADO PICÓN, A.: «Las oficinas judiciales vistas desde dentro», *Jornadas de estudio: «La oficina judicial: hacia un nuevo modelo»*, ob. cit., pp. 115 y ss., p. 124, en defensa de jornadas de estudio de «internet como instrumento básico de trabajo».

170. En esta línea MARTÍN CONTRERAS: «La reforma de la oficina judicial», ob. cit., pp. 719 y 720. Ya hace tiempo que ha sido advertido que «la ubicación y distribución material vigentes no son las más correctas a fin de lograr: ni el ambiente de trabajo más favorable para los funcionarios ni para la seguridad de los expedientes ni para atender a los profesionales del derecho ni a los justiciables en general»; así, PEDRAZ PENALVA: «Notas sobre la oficina judicial y su reforma», ob. cit., p. 870, cuyas siguientes palabras no podemos resistirnos a transcribir: «En habitaciones propias de una vivienda —y no de las mejores—, sin separación alguna entre sí ni del público, carentes en general de iluminación y ventilación, están hacinados Oficiales y Auxi-

- C) *Acceso de profesionales de la Justicia y público en general*: un tema de evidente importancia y en relación con la propia estructura y condiciones de las sedes judiciales es la presencia de los profesionales de la Justicia (abogados, procuradores...) y público en general por doquier en cualesquiera dependencias y a cualesquiera horas con pretensión de obtener información de uno u otro tipo. Es evidente además que la «presión» que éste involuntariamente ejerce recae en exclusiva sobre el funcionariado: los representantes, letrados y las partes procesales interesados en la tramitación de su asunto, otros profesionales jurídicos o no y público general solicitando la atención sobre los más diversos asuntos y cuestiones o presentando escritos y documentación varia. De esta forma difícilmente podrán tales funcionarios realizar correctamente y con un mínimo de concentración —y siquiera realizar efectivamente— sus tareas, máxime cuando está presente la exigencia de criterios de productividad para evaluar el rendimiento de las personas que trabajan en la oficina judicial ⁽¹⁷¹⁾. Afortunadamente parece estar previsto en el nuevo diseño de oficina judicial una diferente organización en materia de accesibilidad de profesionales jurídi-

liares, amontonados los autos y aun las piezas de convicción: prestan declaración —aun en asuntos penales, matrimoniales, etc.— las partes y los testigos, mientras en un continuo tráfago entran Procuradores y Letrados sin conexión con el proceso que se está “sustanciando”, personas más o menos relacionadas con algún asunto pendiente, o, simplemente, gente en busca de información general; todo ello sin perjuicio de que de forma simultánea suenen los teléfonos, se escriba a máquina en la mesa vecina, se cambien impresiones sobre la redacción de algún escrito o sobre los más variopintos temas, o esté esperando algún detenido esposado entre lloros y lamentos de algunos de sus familiares; etc. Más que una Justicia kafkiana parece una Justicia de feria...». Aun con la sustitución de la máquina de escribir por el ordenador y alguna otra leve mejora, el panorama descrito no parece muy alejado todavía de la realidad, al menos para algunos Juzgados y Tribunales.

Precisamente en relación con el tema de los espacios físicos véase GARBERÍ LLOBREGAT, J.: «Consideraciones sobre la proyectada reforma de la oficina judicial (con particular referencia a los espacios físicos)», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 584, de 3 de julio de 2003, pp. 7-8, así como MARTÍN CONTRERAS: «Un nuevo diseño para la oficina judicial», ob. cit., pp. 4-5, y RODRÍGUEZ RIVERA: «Funciones de los Secretarios Judiciales y del resto de cuerpos de funcionarios al servicio de la administración de Justicia...», ob. cit., esp. p. 1441. En algunas ciudades de nuestro país ya puede hablarse de la existencia de una verdadera «ciudad de la justicia» (por ejemplo, en País Vasco, Valencia, próximamente Málaga, etc.); también Burgos estrena próximamente una sede judicial que es de esperar cumpla estos parámetros de «funcionalidad» en relación con los nuevos cuerpos.

171. En esta línea, MARTÍN CONTRERAS: «La oficina judicial», ob. cit., p. 701 y PEDRAZ PENALVA: «Notas sobre la oficina judicial y su reforma», ob. cit., p. 870, cuya impresión al respecto acaba de ser reproducida. En cuanto a la mencionada exigencia de rendimiento, la mayor presión en este sentido deriva de la propia instauración del sistema de «módulos judiciales» para Jueces y Magistrados aunque ahora, no en vano, está previsto el establecimiento de un complemento de productividad también para estos funcionarios en la línea más arriba descrita y ya en su día propuesto, a similitud de otro funcionariado de la Administración Civil (de nuevo, MARTÍN CONTRERAS: «La oficina judicial», ob. cit., p. 723).

Mar Jimeno Bulnes

cos y público general a las distintas dependencias judiciales ⁽¹⁷²⁾ para recabar la información precisa con habilitación de unos y otros espacios o sistemas (acceso informático, centralización de la información en un servicio o funcionario, etc.), sin que ello menoscabe, claro está, el derecho de los ciudadanos a una justicia transparente ⁽¹⁷³⁾. Pero todo este nuevo sistema de información exige también por parte de tales profesionales jurídicos y ciudadanos en general un importante cambio de mentalidad ante la administración de Justicia.

- D) *Gestión de calidad*: se reserva la mención a este índice al último lugar, por cuanto parece ser este un factor básico y de futura implantación en la valoración de la nueva oficina judicial, tal y como anticipa el Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre la Justicia ⁽¹⁷⁴⁾ y donde precisamente juegan un papel fundamental los departamentos o consejerías de las respectivas Comunidades Autónomas una vez operada la transferencia en la materia. De este modo se propone la aplicación de los sistemas de Gestión de la Calidad utilizados para proceder a la evaluación de las empresas públicas y privadas también para la administración de Justicia, en su exclusiva función de dirección de la oficina judicial por

172. Véase así la «Propuesta sobre nuevo diseño de la oficina judicial», p. 6, en la que se anticipa *«la ventaja que reportará para los funcionarios el hecho de que el acceso de los profesionales y de los ciudadanos interesados en el expediente deje de ser directo al órgano correspondiente y, dentro de este, al funcionario en concreto que entiende de la tramitación del asunto en particular, lo que provoca hasta ahora continuas interrupciones en su trabajo cotidiano, que se eliminarán desde el momento en que se creen servicios centralizados en los que se proporcione dicha información, a cargo de un único equipo de funcionarios»*. No obstante este modelo llamado de «expediente electrónico» también ha provocado críticas; así, las alegaciones presentadas por CSI-CSIF a este modelo de oficina judicial, entendiéndolo que *«se produce una importante desconexión de los funcionarios sobre la totalidad del expediente, dado que se tiende a la especialización y al trabajo coordinado en sus diferentes fases y trámites»* (p. 4).

Dicho sistema de oficina de información centralizada e instalación de terminales informáticas en sedes profesionales y atribución de la tarea de información a uno o a un grupo de funcionarios en exclusiva, en función del volumen de Juzgados y Tribunales en cada localidad, ya fue propuesto en su día por MARTÍN CONTRERAS: «La reforma de la oficina judicial», ob. cit., p. 724.

173. Consúltense sendos documentos, «Carta de Derechos del Ciudadano ante la justicia» (por ejemplo, en *Otrosí*, núm. 35, 2002, pp. 9 y ss.) y «Plan de Transparencia Judicial», aprobado por Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia (BOE de 1 de noviembre de 2005, núm. 261, pp. 35729 y ss.).

174. *Libro blanco de la Justicia*, p. 138, indicando textualmente en relación con este personal al servicio de la administración de Justicia que *«se debe valorar, sin duda, la productividad (su control y medición será muy fácil con la implantación de la herramienta informática), la calidad y la responsabilidad en función del puesto de trabajo que desempeña»*.

parte del Secretario Judicial (función administrativa) y dejando al margen, claro está, las funciones procesales propiamente dichas amén de la jurisdiccional de Jueces y Magistrados⁽¹⁷⁵⁾. La experiencia, que ya ha sido aplicada en alguna Comunidad Autónoma —en concreto, el País Vasco desde la Viceconsejería de Justicia del Gobierno vasco— supone por tanto el empleo de los parámetros marcados por las normas internacionales UNE-EN-ISO 9000 para evaluar la calidad, esto es, «*el grado en el que un conjunto de características inherentes de un servicio, sistema o proceso cumplen con los requisitos*»⁽¹⁷⁶⁾. Ello reporta, además de una nueva concepción de los destinatarios de la administración de Justicia o justiciables, que pasan a ser considerados —con mayor o menor acierto— como «clientes» en una acepción ya diferente de la empleada para la empresa privada⁽¹⁷⁷⁾, un cambio que consideramos más interesante desde la perspectiva interna de la oficina judicial, especialmente por lo que respecta a los protagonistas de nuestro trabajo; esto es, la formación de un verdadero grupo o «equipo» por parte de los funcionarios de la administración de Justicia bajo la efectiva dirección del Secretario Judicial, concepto que en la actualidad no existe y así viene echándose en falta en la práctica judicial diaria⁽¹⁷⁸⁾. A buen seguro que la existencia de una mayor comunicación y colaboración entre los distintos cuerpos de funcionarios —entre

175. En esta línea GÓMEZ ÁLVAREZ: *Calidad en la gestión de la oficina judicial*, ob. cit., p. 21.

176. Norma ISO 9000:2000 aprobada por el Comité Europeo de Normalización (CEN) con sede en Bruselas el 15 de diciembre de 2000. La entidad reconocida en España como evaluadora de dicha calidad y que procede a la concesión de la correspondiente acreditación en este sentido es la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

177. Así, GÓMEZ ÁLVAREZ: *Calidad en la gestión de la oficina judicial*, ob. cit., p. 39.

178. Véase FUERTES MARTÍNEZ: «Algunas hipótesis sobre el *mobbing* y la calidad de vida laboral en la Administración de Justicia», ob. cit., quien incide en la inexistencia de concepto de equipo en Juzgados y Tribunales y dice que solo «*se cultiva la mera suma de individuos en un trabajo en cadena*» (p. 3); así también refiere la existencia de una gran distancia entre los «*dos estamentos*» que forman parte de los medios personales de cada Juzgado, léase Jueces y/o Magistrados y Secretarios Judiciales por una parte y los cuerpos de funcionarios ahora generales por otra (p. 2). En cuanto a la falta de noción de equipo, desde las conversaciones con los funcionarios de este segundo grupo se exponen actitudes de todo tipo y así, con independencia, claro está, de la armonía que pueda existir en muchas sedes judiciales, así como la diferencia de conductas entre el distinto personal, se denuncia el escaso compañerismo, el «escaqueo», el mayor o menor esfuerzo y/o trabajo de unos y otros en la realización de sus tareas, etc.

En línea similar, BALERDI, BENDALA y CARMENA: *Claves para la gestión de la nueva oficina judicial*, ob. cit., pp. 45 y 48, en referencia a la importante tarea de formar «equipos de personal» y proponiendo como objetivo fundamental la motivación de los funcionarios.

Mar Jimeno Bulnes

ellos y con su «director»— en particular redundaría en una mejora de la calidad de la administración de Justicia y, desde luego, en un mejor rendimiento, productividad, gratificación y esfuerzo personal de todos los participantes de la oficina judicial. Esta sí que es la apuesta decisiva del modelo de oficina judicial para el siglo XXI.

BREVE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

AA.VV.: *Jornadas de estudio sobre la oficina judicial: hacia un nuevo modelo*, Colex, Madrid, 2000.

BALERDI MÚGICA, J.M., BENDALA GARCÍA, R. y CARMENA CASTRILLO, M.: *Claves para la gestión de la nueva oficina judicial*, El Derecho, Madrid, 2005.

CARRETERO GONZÁLEZ, C.: «Estructura y funcionamiento de la oficina judicial», *Revista de Derecho Procesal*, núm. 1-3, 2004, pp. 153 y ss.

COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN, Sección Especial para la Reforma Procesal, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991.

DE HOYOS SANCHO, M.: «Nuevo diseño de la secretaría judicial y agilización de la justicia», *Poder Judicial*, núm. 50, 1998, pp. 13 y ss.

FUERTES MARTÍNEZ, F., «Algunas hipótesis sobre el *mobbing* y la calidad laboral en la Administración de Justicia», <www.funcionariosjusticia.com>.

GÓMEZ ALVAREZ, R.: *Calidad en la gestión de la oficina judicial*, Bosch, Barcelona, 2004.

HERCE QUEMADA, V.: «La nueva Justicia Municipal», *Revista de Derecho Procesal*, núm. 1, 1946, pp. 47 y ss.

HERRERA CASCÓN, H.: «La función de los oficiales de la administración de Justicia en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial», *Revista Procuradores*, núm. 15, 1985, pp. 15 y ss.

JURADO, S.: «El médico forense en la labor judicial», *Anales de la Clínica médico-forense de Madrid*, 1952, pp. 9 y ss.

LACABA SÁNCHEZ, F.: «Valor procesal de la actuación del médico forense», *Diario La Ley*, núm. 6130, de 18 de noviembre de 2004.

MARTÍN CONTRERAS, L.: «Un nuevo diseño para la oficina judicial», *Diario La Ley*, núm. 6119, de 3 de noviembre de 2004.

MARTÍN MORATO, M.: «El nuevo modelo de oficina judicial», *Revista Jurídica de Castilla y León*, núm. 5, 2005, pp. 173 y ss.

PAREJA RUIZ, A.: «Reflexiones sobre el personal auxiliar de la administración de justicia», *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, 1969, núm. 815, pp. 3 y ss.

PEDRAZ PENALVA, E.: «Notas sobre el Secretariado en el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de 23 de febrero de 1985», *La Ley* 1985-I, pp. 1030 y ss.

— «Notas sobre la oficina judicial y su reforma», *Justicia* 1989-IV, pp. 847 y ss.

— «La nueva Secretaría Judicial», *Poder Judicial*, núm. 26, 1992, pp. 89 y ss.

PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ, L.: «Agentes judiciales y eficacia del Derecho», *Trabajos y orientaciones de Derecho Procesal*, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1964, pp. 96 y ss.

RODRÍGUEZ RIVERA, F.E.: «Funciones de los Secretarios Judiciales y del resto de Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003, que modifica a la Ley Orgánica del Poder Judicial», *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, núm. 1963, de 15 de abril de 2004, pp. 1417 y ss.

VIEIRA MORANTE, F.J.: «La nueva oficina judicial: luces y sombras», *Jueces para la democracia*, núm. 52, 2005, pp. 16 y ss.